

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2018

ORDEN DEL DÍA N° 986

Impreso el día 9 de noviembre de 2018

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y
ASUNTOS PENALES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en los proyectos de ley de varios señores senadores por el que se modifica el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos. (S-3698, 4011, 3727, 3730/18 y S-115, 606/17)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda han considerado los proyectos del señor senador Pichetto y otros, registrado bajo expediente S-3698/18; de la señora senadora Brizuela y Doria y otros, registrado bajo el expediente S-3727/18; de los señores senadores Rozas y Brillard Pocard, registrado bajo el expediente S-3730/18; de la señora senadora Fiore Viñuales, registrado bajo el expediente S-115/17; de la señora senadora Odarda, registrado bajo el expediente S-606/17; y la fe de erratas registrada bajo el expediente S-4011/18, por los que se modifican el régimen de financiamiento de los Partidos Políticos; y por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO

MODIFICACIONES A LA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS LEY 26.215

Artículo 1°. Modifícase el artículo 4 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CAP.I SECCIÓN II. RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 4 - Financiamiento partidario. Se establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a los establecido en la presente ley.”

Artículo 2° - Modifícase el artículo 14 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14. — Financiamiento privado. Los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes aportes del sector privado:

- a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- b) donaciones de otras personas humanas —no afiliados— y personas jurídicas;
- c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales;
- d) las herencias o legados que reciban”.

Artículo 3° - Modifícase el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15. — Prohibiciones. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:

- a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
- b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestadales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires;
- c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;
- d) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar;
- e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;
- f) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;
- g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;
- h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales;

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.”

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 16. — Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al cinco por ciento (5%) del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos.

La Cámara Nacional Electoral informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral”.

Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 16 bis.- Aporte en dinero. Los aportes en dinero deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deben informar a la agrupación política destinataria del aporte, la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por parte de este último.

En el caso de recibir contribuciones prohibidas o que excedan los montos máximos previstos en esta Ley, la agrupación política deberá rechazar y revertir la operación en el término de diez (10) días hábiles de recibida la misma. En caso de no resultar posible la identificación del donante a los fines de la reversión de la operación, dichos aportes serán girados al “Fondo de Financiamiento del Programa para Personas Con Discapacidad” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) descripto en el Anexo II que forma parte del artículo 7º de la ley 24.452.”

Artículo 6º -Incorpórase como artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 16 ter. — Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”. Las agrupaciones políticas registrarán los aportes privados recibidos en el “Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales”, que deberá crear la Cámara Nacional Electoral y estará disponible en su sitio “web”.

El registro deberá efectuarse en el término máximo de siete (7) días hábiles desde la recepción del aporte en la cuenta bancaria de la agrupación política.

La Cámara Nacional Electoral instrumentará una consulta con los mecanismos de control pertinentes a los efectos de autorizar el uso de dichos fondos u ordenar al partido o agrupaciones políticas la reversión de los mismos. La Cámara Nacional Electoral realizará este control en un plazo de siete (7) días hábiles. En caso de no poder ser revertidos, los fondos serán destinados al “Fondo de Financiamiento del Programa para Personas Con Discapacidad” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) descripto en el Anexo II que forma parte del artículo 7º de la ley 24.452.”

Artículo 7°.- Incorpórese como artículo 16 quáter de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 16 quáter: Aportes en Especie: Los aportes que consistan en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita, serán considerados aportes en especie y se harán constar en un acta suscripta por la agrupación política y el aportante. En esta acta deben precisarse los datos de identificación del aportante, del bien o servicio aportado, el monto estimable en dinero de la prestación y la fecha en que tuvo lugar. El monto del aporte efectuado a través de bienes o servicios será computado conforme al valor y prácticas del mercado.”

Artículo 8°.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 22.- Ejercicio contable. El cierre del ejercicio contable anual de los partidos políticos es el día 31 de diciembre.”

Artículo 9°.- Modifíquese el artículo 23 de la Ley n° 26.215 y sus modificatorias, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Artículo 23.- Estados Contables Anuales. Dentro de los noventa (90) días de finalizado cada ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, el estado anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos por el presidente y tesorero del partido y por contador público matriculado en el distrito. El informe que efectúen los contadores públicos matriculados deberá contener un juicio técnico con la certificación correspondiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

Deberán poner a disposición de la justicia federal con competencia electoral la correspondiente documentación respaldatoria.

Asimismo deberán presentar una lista completa de las personas humanas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación personal, identificación tributaria, monto y fecha del aporte.

El incumplimiento de la presentación de los estados contables importara las sanciones previstas en el Art 66 bis de la presente ley.”

Artículo 10°.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 26.- Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por los partidos políticos al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá traslado a la agrupación política correspondiente para que en un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo responda las observaciones o requerimientos formulados, bajo apercibimiento de resolver en el estado de la causa, previa vista al Ministerio Público Fiscal.

Si el partido político contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de quince (15) días de recibidos los mismos. De este informe se dará traslado por diez (10) días al partido

político. Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez electoral resolverá dentro del plazo de treinta (30) días.

Las presentaciones que realice el partido político en el marco de las causas de control patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por el presidente y el tesorero del partido político.

Si en el procedimiento que aquí se regula se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral. En ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario. ”

Artículo 11º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 27.- Responsables económico-financieros de la agrupación. Los partidos políticos en la primera presentación ante el Juzgado Federal con competencia electoral efectuada en relación con su participación en el proceso electoral, y las alianzas electorales en su acuerdo constitutivo, designarán dos (2) responsables económico-financieros para las elecciones generales, debiendo en todos los casos ser mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliados al partido político o, en su caso, a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza. Uno de los responsables económico-financiero deberá ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que conforman la alianza y el otro deberá contar con matrícula profesional vigente de Contador Público.

Los designados deben concurrir personalmente ante el juez electoral correspondiente para aceptar el cargo, bajo promesa de desempeñarlo fielmente con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, y constituir domicilio electrónico.

En todo lo referente a la campaña electoral, el responsable económico-financiero tendrá a su cargo las obligaciones descriptas en el artículo 19 de esta Ley, siendo solidariamente responsable con el tesorero de la agrupación política, por el cumplimiento de la normativa que le resulte aplicable.”

Artículo 12º.- Sustitúyese el artículo 43 quáter de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 43 quáter.- Servicios de Comunicación Audiovisual. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el cinco por ciento (5%) del tiempo total de programación para fines electorales.”

Artículo 13º.- Sustitúyese el artículo 44 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 44.- Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado para campaña electoral todo aporte, en dinero o en especie,

que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinada al financiamiento de gastos electorales.

En relación con los aportes en dinero o en especie para campaña electoral rigen idénticas disposiciones respecto a los aportantes prohibidos y a los instrumentos financieros habilitados para realizar los aportes a las establecidas en esta Ley para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos. Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación que, incorporando la tecnología existente, tiendan a que los aportes de campaña a las agrupaciones políticas, se lleven a cabo a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.”

Artículo 14º.- Sustitúyese el artículo 44 bis de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 44 bis.- Límite de recursos privados de campaña por agrupación y de aportes privados de campaña por persona.

Las agrupaciones políticas podrán recibir, con motivo de la campaña electoral, un total de recursos privados que no supere el monto equivalente a la diferencia, entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta Ley y el monto del aporte para campaña electoral correspondiente a la agrupación.

Para cada campaña electoral las agrupaciones políticas no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica, un monto superior al cinco por ciento (5%) de los gastos permitidos para esa campaña.

Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la Cámara Nacional Electoral informará a los partidos políticos el límite de aportes privados para campaña permitidos de acuerdo a este artículo, y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.”

Artículo 15º - Sustitúyese el artículo 44 ter y el 44 quáter de la Ley 26.215, que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 44 ter - La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.

Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada por la Cámara ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, el procedimiento de selección de los

entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral para su público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentren inscriptas en el Registro, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral.”

“Artículo 44 quáter – Desde ocho (8) días antes de cada elección y hasta tres horas después de su cierre, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado.

Los medios de comunicación que incumplan esta disposición podrán ser sancionados con multa del 0,1% (cero coma uno por ciento) al 10% (diez por ciento) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.

El proceso de aplicación de la sanción, que podrá iniciarse de oficio o por denuncia, estará a cargo del juez federal con competencia electoral del distrito del domicilio de la empresa y la decisión será apelable ante la Cámara Nacional Electoral.”

Artículo 16º - Incorpórase como artículo 44 quinquies de la Ley 26.215, el siguiente:

“Artículo 44 quinquies: Las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplan las disposiciones precedentes serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Multa de 500.000 a 5.000.000 de pesos;
- d) Suspensión de la inscripción en el Registro;
- e) Cancelación de la inscripción en el Registro.”

Artículo 17º.- Incorpórase como Capítulo IV ter del Título III de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente: “Capítulo IV ter. Del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña”

“Artículo 44 sexies.- Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. Créase el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, el que funcionará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.”

“Artículo 44 septies.- Las agrupaciones políticas sólo podrán contratar la provisión de espacios de publicidad en vía pública para campañas electorales con los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña.

La autoridad de aplicación garantizará la igualdad en el trato a las diferentes agrupaciones para el acceso a la publicidad en la vía pública.”

“Artículo 44 octies.- Actualización del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. La Cámara Nacional Electoral mantendrá actualizada la información del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral, para conocimiento de las agrupaciones políticas y de la ciudadanía.”

Artículo 18°.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 61.- Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por las agrupaciones políticas al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá traslado a la agrupación política correspondiente para que en un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo responda las observaciones o requerimientos formulados, bajo apercibimiento de resolver en el estado de la causa, previa vista al Ministerio Público Fiscal.

En caso de alianzas, asimismo, se dará traslado a los partidos políticos que la integren.

Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de quince (15) días de recibidos los mismos. De este informe se dará traslado por diez (10) días a la agrupación política y a los partidos integrantes, en el caso de alianzas.

Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez electoral resolverá dentro del plazo de treinta (30) días.

Las presentaciones que realice la agrupación política en el marco de las causas de control patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el tesorero y responsables económico-financieros del partido político y en el caso de la alianza por los responsables económico - financieros.

Si en el procedimiento que aquí se regula se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral. En ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario. ”

Artículo 19°.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo62.- Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos cuando:

a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32 de esta Ley, o que se trate de fondos no bancarizados;

b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 39 de esta Ley;

c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 16bis, 16 ter, 16 quáter y 44 bis de esta Ley;

d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta Ley;

e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros, espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43 de esta Ley;

f) Los informes de los artículos 23 y 58 de esta Ley no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los fondos recibidos, para desenvolvimiento institucional y para campaña respectivamente.”

Artículo 20°.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo66.- Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona humana o jurídica que efectuar donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15,16, 16bis, y 44bis de la presente Ley.

Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15, 16, 16bis y 44 bis de la presente Ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente Ley. Asimismo, la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los proveedores en general, que violen lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley.”

Artículo 21°.- Incorpórase como artículo 66 bis de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 66 bis.- Serán sancionadas con una multa equivalente al diez por ciento (10%) de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta treinta (30) días los estados contables anuales.

Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega de los estados contables anuales, la multa se duplicará.

Transcurridos noventa (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.

La presentación del estado contable anual produce la caducidad automática de la suspensión cautelar prevista en este artículo.”

Artículo 22°.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 67.- Serán sancionadas con una multa equivalente al diez por ciento (10%) de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta treinta (30) días el informe final de campaña.

Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega del informe, la multa se duplicará.

Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.

La presentación del informe final de campaña produce la caducidad automática de la suspensión cautelar prevista en este artículo.”

Artículo 23°.- Incorpórase como artículo 67 ter de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 67 ter.- Serán sancionados con la prohibición de inscribirse en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, por un período de una (1) a cuatro (4) campañas electorales, quienes proveyeran bienes o servicios a las agrupaciones políticas incumpliendo las prescripciones del Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.

Será sancionada con multa de igual monto que el gasto efectuado y hasta el décuplo de dicho monto, la agrupación política que contratare

la provisión de bienes y servicios para la campaña electoral en violación a lo dispuesto en el Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.”

Artículo 24°.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 71.- Aplíquese el procedimiento previsto en el Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional - Ley 19.945, t.o. por Decreto 2135/83 – para la sanción de aquellas conductas penadas en esta ley.”

Artículo 25°.- Incorpórase como artículo 75 bis de la Ley 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 75 bis.- Provisión de Información a la Justicia Nacional Electoral. La Justicia Nacional Electoral podrá requerir toda la información que estime necesaria para la realización de los controles patrimoniales ordinario y de campaña a su cargo, especialmente a los fines de investigar hechos o actos de financiamiento de los partidos políticos que involucren recursos de procedencia ilícita, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Información Financiera, en los términos previstos en el artículo 13, inciso 3), de la Ley 25.246.

El Banco Central de la República Argentina, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado, deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia efectúe la Justicia Nacional Electoral de manera pronta y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal.”

Artículo 26°.- Incorpórase como artículo 75 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 75 ter.- Adhesión al régimen nacional de financiamiento.

La Ciudad Autónoma Buenos Aires y las provincias que realicen sus elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad previsto en la Ley N° 15.262, podrán adherir al régimen de financiamiento de campañas electorales establecido en la presente Ley, así como al régimen de campañas electorales establecido en el Código Electoral Nacional.”

TÍTULO II

Capítulo único

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL LEY 19.945

Artículo 27°.- Modifícase el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 64 bis.- Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias,

la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia con la oficialización de la lista de candidatos ante la Justicia Electoral y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.”

Artículo 28°- Modifícase el artículo 64 ter del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 64 ter.- Publicidad en medios de comunicación.

Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos y radiales con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los treinta y cinco (35) días previos a la fecha fijada para el comicio.

La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines electorales en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija, y publicidad estática en espectáculos públicos, sólo podrá tener lugar durante el período de campaña establecido en esta Ley.

El juzgado federal con competencia electoral dispondrá en forma inmediata el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la Ley.”

Artículo 29°.- Sustitúyese el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto 2135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 64 quáter. - Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con la quita de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la o las agrupaciones oficialistas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III bis del Título III de la ley 26.215. Las agrupaciones sancionadas no podrán suplir la sanción mediante la contratación de espacios publicitarios de manera privada.”

Artículo 30°.- Incorpórase como artículo 140 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, t.o. por Decreto 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 140 bis.- Sanciones a funcionarios. Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al funcionario público que realice alguna de las siguientes acciones:

a. Coaccione o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.

b. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.”

Artículo 31°.- Incorpórase como artículo 140 ter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, t.o. por Decreto 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 140 ter.- Clientelismo. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, el que ofreciere, prometiére o entregare dinero o cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de determinada manera, en elecciones primarias, generales o internas de los partidos políticos.”

Artículo 32°.- Sustitúyese el Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Capítulo III. Procedimiento electoral sancionador

Artículo 146.- Los Jueces Federales con competencia electoral conocerán de las faltas, delitos y demás infracciones e ilícitos electorales, en primera instancia, con apelación ante la Cámara Nacional Electoral.

Estos procesos así como los dirigidos a determinar responsabilidades personales por infracciones a las Leyes 26.215, 26.571 y sus respectivas modificatorias, que no tengan un régimen procesal establecido, estarán regidos por esta Ley y, en lo que no se oponga a ella, por el Código Procesal Penal.

Artículo 146 bis.- El Juez Federal con competencia electoral de cada distrito conocerá de las infracciones que se cometan, o tengan efectos, en su jurisdicción territorial.

Cuando un hecho tenga efectos en más de un distrito electoral, será competente el juez de aquel en el que se cumplió el último acto de ejecución.

Si se ignora en qué distrito se cometió la infracción, será competente el tribunal que prevenga en la causa.

Artículo 146 ter.- Las contiendas de competencia serán dirimidas por la cámara Nacional Electoral de acuerdo con las reglas del Código Procesal Penal.

Los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal deberán excusarse, y podrán ser recusados, en las circunstancias previstas por la Ley 19.108 y sus modificatorias y el Código Procesal Penal.

Artículo 146 quáter.- La acción en los procesos regulados por esta Ley es pública y está a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal con competencia electoral, quien impulsará la acción durante todo el proceso.

Para las audiencias sostenidas fuera de la jurisdicción territorial de dicho representante, la acción podrá ser impulsada por un representante del Ministerio Público Fiscal con competencia territorial donde la audiencia se realice.

Artículo 146 quinquies.- El representante del Ministerio Público Fiscal tendrá para la investigación preparatoria de los procesos regidos por esta Ley las facultades previstas por el artículo 212 del Código Procesal Penal.

Durante el día en que se realizan elecciones, las atribuciones y facultades vinculadas con el normal desenvolvimiento del comicio, aquí establecidas para el Ministerio Público Fiscal, serán ejercidas por las Juntas Electorales Nacionales.

Artículo 146 sexties.- El representante del Ministerio Público Fiscal podrá por sí mismo disponer el archivo de las actuaciones si es manifiesta la imposibilidad de identificar al autor o partícipes del ilícito o de encontrar suficientes elementos de convicción, o si considera que el hecho investigado no constituye un ilícito. En estos casos, la investigación podrá ser reabierta si se encontraran nuevos elementos.

Artículo 146 septies.- El juez se limitará al control de legalidad de lo actuado por el fiscal en la etapa preparatoria y proveerá las medidas de prueba que éste no pueda producir por sí mismo.

El juez no impulsará la investigación ni dictará auto de procesamiento, elevación a juicio, ni ningún otro auto que implique pronunciarse de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado.

Todas las peticiones o planteos de las partes que deban ser debatidas se resolverán en audiencias orales y públicas.

Artículo 146 octies.- Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado, deberán ser solicitadas por el representante del Ministerio Público Fiscal y decididas por el Juez Federal con competencia electoral de la jurisdicción o en su defecto el Juez Federal más próximo.

Artículo 146 nonies.- Cuando el representante del Ministerio Público Fiscal reuniera, a su juicio, los elementos suficientes, formulará por escrito la acusación contra el imputado, que deberá contener:

- a) La individualización del acusado;
- b) La relación precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen;
- c) El ofrecimiento de las pruebas para la instancia de juicio oral y público;
- d) La calificación legal de los hechos.

Artículo 146 decies.- El imputado tendrá cinco (5) días para ofrecer la prueba de descargo que no se hubiere producido hasta entonces.

Artículo 146 undecies.- El juez valorará la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes de acuerdo con el artículo 356 y concordantes del Código Procesal Penal en audiencia de previo y especial pronunciamiento.

Si el imputado hubiera planteado durante el curso del proceso la nulidad de algún acto y ésta no hubiera sido saneada, la cuestión será decidida por el juez en la misma audiencia.

Artículo 146 duodecies.- La audiencia de juicio se llevará a cabo bajo las reglas de los artículos 363 a 395 del Código Procesal Penal.

El Juez Federal con competencia electoral actuará como tribunal de juicio unipersonal.

Si el Juez Federal que conoció en la instrucción se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante por otro Juez Federal de la misma jurisdicción.

Artículo 146 terdecies.- En la audiencia de juicio, el imputado podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada pudiendo aplicar medidas sustitutivas de la prisión, multa o inhabilitación.

Si en la audiencia de juicio el imputado acepta los hechos de la acusación, el juez dictará sentencia sin más trámite, pudiendo rebajar la sanción hasta en dos tercios (2/3) del mínimo legal.

Artículo 146 quaterdecies.- Las resoluciones interlocutorias dictadas durante el curso de las audiencias serán recurribles mediante recurso de reposición.

Sólo son recurribles ante la Cámara Nacional Electoral:

- a) La sentencia definitiva y los autos que pongan fin a la acción o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la suspensión del juicio a prueba. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir en el caso de la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado a la mitad o más de la escala prevista para el ilícito electoral y de la sentencia condenatoria cuando se haya

impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida;

b) El auto de prisión preventiva;

c) Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado.

Artículo 146 quinquiesdecies.- La etapa preparatoria no puede llevar más de seis (6) meses contados desde el primer acto de la investigación.

Cumplido dicho plazo, el juez intimará al representante del Ministerio Público Fiscal, quien podrá optar entre:

a) Formular la acusación con los elementos disponibles;

b) Archivar las actuaciones;

c) Solicitar una única prórroga que será concedida por el juez en caso de existir elementos suficientes que permitan suponer que podrán encontrarse nuevos elementos de prueba.

Si esta prórroga fuera rechazada, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá formular la acusación con los elementos de los que disponga.

Artículo 146 sexiesdecies.- La acción en los procesos regulados por esta Ley se extingue por:

a) La muerte del investigado;

b) Prescripción;

c) Amnistía;

d) El desistimiento del representante del Ministerio Público Fiscal.

Artículo 146 septiesdecies.- Los plazos de la prescripción y las causales de suspensión e interrupción de dicho plazo son los establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina. A estos efectos, se considerará que los incisos b), c) y d) del artículo 67 del Código Penal hacen referencia a la formulación de la acusación prevista en el artículo 146 nonies del presente Código.

Artículo 146 octiesdecies.- Delitos previstos en el Código Penal.

Si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias se aplicarán las siguientes reglas:

I.- Fuero de atracción. Será competencia de la justicia electoral la investigación de todos los delitos cuya acción penal dependiese de cuestiones prejudiciales cuya decisión atañe exclusivamente a su competencia.

Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:

1° Las que versaren sobre la presentación de las rendiciones de los artículos 23, 54 y 58 de la Ley 26.215 y artículos 36 y 37 de la Ley 26.571 o las que en futuro reemplacen;

2° Las que versaren sobre la prueba, su análisis y evaluación en las rendiciones del inciso anterior;

3° La aprobación o desaprobación de las rendiciones de los artículos 23, 54 y 58 de la Ley N° 26.215 y artículos 36 y 37 de la Ley N° 26.571 o las que en futuro reemplacen.

4° Las infracciones, faltas y delitos previstos en leyes electorales.

II.- Atracción de otros procesos. La apertura de los procesos de control en el fuero electoral produce, a partir de la publicación en el sitio web del Poder Judicial de la Nación, la atracción a la justicia electoral del trámite de los juicios en otros fueros en que se ventilan directa o indirectamente las cuestiones enumeradas en el inciso I del presente artículo.

III. En todos los casos, cualquiera que sea la sentencia posterior en el fuero penal, la sentencia anterior recaída en el juicio electoral pasada en autoridad de cosa juzgada conservará todos sus efectos en sede electoral.”

TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO LEY 26.571

Artículo 33°.- Modifícase el artículo 31 de la Ley 26.571, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 31.- La campaña electoral de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias se inicia a partir del plazo fijado por el artículo 26 de esta ley para la oficialización de la lista de candidatos ante las Junta Electorales y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

La publicidad electoral audiovisual comienza treinta (30) días antes y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.”

Artículo 34°.- Incorpórase el artículo 37 bis de la Ley 26.571, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 37 bis.- Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes finales de campaña de las listas y de las agrupaciones políticas previstos en los artículos 36 y 37 de esta Ley al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá traslado a la agrupación política y a las listas correspondientes para que un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo responda las observaciones o requerimientos formulados, bajo apercibimiento de resolver en el estado de la causa, previa vista al Ministerio Público fiscal.

Si la agrupación política y/o las listas contestaran las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de quince (15) días de recibidos los mismos. De este informe se dará traslado por diez (10) días a la agrupación política y/o a las listas.

Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez electoral resolverá dentro del plazo de treinta (30) días.”

TÍTULO IV ASPECTOS FISCALES DE LOS APORTES

Artículo 35°.- Incorpórase como tercer párrafo del inciso c) del artículo 81 de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

"En el caso de donaciones al Fondo Partidario Permanente o a los partidos políticos reconocidos, incluyendo las que se hagan para campañas electorales, el límite establecido para su deducción deberá calcularse de forma autónoma respecto del resto de las donaciones."

TÍTULO V CAPÍTULO ÚNICO LEY 19.108

Artículo 36°.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de la Ley 19.108, y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) Organizar en su sede un Cuerpo de Auditores Contadores para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables. A estos fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al siete por ciento (7%) del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional y con los recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en caso de no cubrirse el mínimo establecido. El fondo estará destinado a financiar los gastos derivados de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales, y toda erogación orientada al control del financiamiento de las agrupaciones políticas. Trimestralmente el tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto (1/4) de dicho monto mínimo y en caso de no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a fin de que sea completada”.

TÍTULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 37°.- Las agrupaciones políticas deben adecuar sus Cartas Orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento a las prescripciones dispuestas en la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, siendo a partir del vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que se opongan a la presente.

Artículo 38°.- Créanse ocho (8) cargos de Auditores, con categoría presupuestaria de Prosecretario Administrativo que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 39°.- El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa reorganizarán sus dependencias y adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones que por las modificaciones del Código Electoral Nacional en esta Ley, se les asignan.

Artículo 40°.- El Poder Ejecutivo Nacional aprobará el texto ordenado de la Ley 26.215 y del Código Electoral Nacional dentro del plazo de ciento ochenta (180) días desde la entrada en vigencia de esta Ley.

Artículo 41°.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 42°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de Noviembre de 2018

Dalmacio E. Mera – Pedro G. A. Guastavino – Esteban J. Bullrich – Luis P. Naidenoff – Néstor P. Braillard Pocard – Federico Pinedo – Oscar A. Castillo – Ángel Rozas – Rodolfo J. Urtubey – Silvia B. Elías de Pérez – Olga I. Brizuela y Doria – Julio C. Martínez – José R. Uñac – Claudio J. Poggi – Pamela F. Verasay – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini – Ernesto Félix Martínez – Magdalena Solari Quintana – Carlos M. Espínola – Silvia del Rosario Giacoppo.-

En disidencia parcial: Cristina Fiore Viñuales –

ANTECEDENTES

(I)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados

CAPITULO I.

Artículo 1º - Modificase el artículo 4 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“CAP. I SECCIÓN II. RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ARTÍCULO 4º — Financiamiento partidario. Se establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.”

Artículo 2º - Modificase el artículo 14 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 14. — Financiamiento privado. Los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes aportes del sector privado:

- a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- b) donaciones de otras personas humanas —no afiliados— y personas jurídicas.
- c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales.
- d) las herencias o legados que reciban”.

Artículo 3º - Modificase el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 15. — Prohibiciones. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:

- a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
- b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestadales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires;
- c) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;
- d) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;
- e) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores.”

Artículo 4º - Modificase el artículo 16 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 16. — Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir, y las personas humanas o jurídicas no podrán aportar, por año calendario para desenvolvimiento institucional montos superiores al menor de los siguientes valores:

- a) Monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior, y;
- b) Monto equivalente al CINCO (5%) del total de las ganancias netas de la persona humana o jurídica durante el último ejercicio anual, entendiéndose a tal efecto lo normado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web de la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL”.

Artículo 5º -Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTICULO 16 bis. Requisitos para aportar. Los aportes deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Para el caso de personas jurídicas, requerirán siempre acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto.
2. Los aportes en dinero deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas digitales siempre que permita la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte. Dichas contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las personas humanas o jurídicas que hayan realizado las contribuciones o donaciones.
3. Cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación expedida por el partido político en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
4. En caso de recibir contribuciones prohibidas o que excedan los montos previstos en esta Ley, el partido político o alianza deberá rechazar y revertir la operación en el término de CINCO (5) días hábiles de recibida la misma. En caso de no ser posible la identificación del donante a los fines de la reversión de la operación, dichos aportes serán transferidos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para el financiamiento del programa de atención integral para las personas con discapacidad descripto en el Anexo II que forma parte del artículo 7º de la ley 24.452.”

Artículo 6º -Incorpórase como artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTICULO 16 ter. — Registro de Trazabilidad de Aportes a Partidos Políticos. Crease el “Registro de Trazabilidad de Aportes a Partidos Políticos” que alcanzará a las personas humanas y jurídicas aportantes.

Los sujetos referidos en el párrafo anterior deberán, en forma concomitante al aporte efectuado por cualquier concepto, producir la información que se indica en el micrositio “Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales”, disponible en el sitio "web" de la Administración

Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La información registrada será puesta a disposición de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, previa firma de acuerdo de adhesión respectivo.”

Artículo 7º - Modifícase el artículo 17 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 17. — Tratamiento impositivo. Para el caso de los aportes, y siempre que sean realizadas cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 16 bis y 16 ter de la presente ley, las personas humanas o jurídicas podrán optar por alguno de los siguientes tratamientos:

a) En relación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deducir las mismas de la ganancia neta del ejercicio, o;

b) Respecto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997 y sus modificaciones, los responsables del impuesto podrán computar como crédito fiscal del gravamen el monto equivalente al treinta y cinco (35%) por ciento de las donaciones efectuadas y efectivamente abonadas al momento de presentación de la declaración jurada del tributo.

Tratándose de exportadores, las aludidas donaciones tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Los importes de las donaciones que sean susceptibles de ser computados como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, estarán sujetos al procedimiento establecido por el artículo 13 de la citada ley del impuesto, cuando los ingresos que las originen se relacionen indistintamente con operaciones gravadas y con operaciones exentas o no alcanzadas.”

Artículo 8º - Modifícase el artículo 30 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“TITULO III. DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. CAP. I. OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

“ARTICULO 30. — Constancia de operación. Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña electoral, superior a quinientos (500) módulos electorales deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una "constancia de operación para campaña electoral", en la que deberán constar los siguientes datos:

- a) identificación tributaria del partido o alianza y de la parte co-contratante;
- b) importe de la operación;
- c) número de la factura correspondiente;
- d) número del cheque destinado al pago.

Las "Constancias de Operación para Campaña Electoral" serán numeradas correlativamente para cada campaña y deberán registrarse en los libros contables.”

Artículo 9º - Sustitúyase el artículo 44 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, por el siguiente texto:

ARTICULO 44. —FINANCIAMIENTO PRIVADO. Constituye financiamiento privado de campaña electoral todo aporte en dinero, o estimable en dinero, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales.

Artículo 10º - Sustitúyase el artículo 44 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, por el siguiente texto:

“ARTICULO 44 bis. —Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir, y las personas humanas o jurídicas no podrán aportar, por campaña electoral montos superiores al menor de los siguientes valores:

- a) Monto equivalente al QUINCE (15%) del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior, y;
- b) Monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del total de las ganancias netas de la persona humana o jurídica durante el último ejercicio anual, entendiéndose a tal efecto lo normado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web de la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.”

Artículo 11º - Incorpórase como artículo 44 ter de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

“ARTICULO 44 ter — Para el caso de los aportes que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales, a que hace mención el artículo 44, resultaran de aplicación las disposiciones previstas en los artículos 16 bis, 16 ter y 17 de la presente ley.

Los partidos políticos deben hacer públicos los aportes recibidos a partir del financiamiento privado, al menos 25 días previos a la realización de los comicios, a través de la página de internet sobre información electoral habilitada a tal fin por el Poder Ejecutivo, y en la página oficial del partido político o alianza electoral.

Los partidos políticos tienen expresamente prohibido recibir aportes privados a partir de los veinticinco (25) días previos a la realización de los comicios y hasta cinco (5) días posteriores a la realización de los mismos.”

Artículo 12º - Incorpórase como artículo 44 quater de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

“ARTICULO 44 quater — Destino de los aportes privados remanentes. Los fondos que hubieren sido aportados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la presente que no hubieren sido utilizados en el marco de la campaña electoral serán transferidos automáticamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, creado por ley 19.032. El Instituto destinará los fondos exclusivamente al financiamiento del programa de atención integral para las personas con discapacidad descripto en el Anexo II que forma parte del artículo 7º de la ley 24.452.

Idéntico tratamiento recibirán los aportes en los que no haya sido posible la identificación del donante a los fines de la reversión de la operación establecida en el artículo 16 bis de la presente ley.

Debe dejarse constancia expresa de ello en el informe final de la campaña.

Dicha información debe hacerse pública en los términos del segundo párrafo del artículo 44 ter de la presente.”

Artículo 13º - Modifícase la numeración de los artículos 44 ter y 44 quater de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, por los siguientes:

“ARTICULO 44 quinquies (ex 44 ter) La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.

El registro deberá abrirse con una anterioridad no menor a los treinta (30) días antes de la fecha de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante cada acto eleccionario.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle

técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL para su público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral.

ARTICULO 44 sexies. (ex 44 quater) Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado.”

Artículo 14º - Modifícase el nombre del Capítulo V, del Título III de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, por el siguiente:

CAPÍTULO V. DE LOS GASTOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

Artículo 15º - Modifícase el artículo 45 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 45 — GASTO ELECTORAL. A los efectos de esta ley, se entiende como gasto electoral toda erogación realizada por una agrupación política, efectuada durante el período establecido para la realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo pago de cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:

- a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para una agrupación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;
- b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones políticas durante la campaña electoral;
- c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral;

- d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus candidatos;
- e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;
- f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de las agrupaciones políticas y de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos de propaganda;
- g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento permanente del partido.”

Artículo 16º -Deróganse los artículos 45 bis, 46, 47 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.

Artículo 17º -Modifícase el artículo 51 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215 por el siguiente texto:

“ARTICULO 51. Gastos realizados por anticipado. Aquellas compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar debidamente respaldadas e informadas en notas en los informes de los artículos 54 y 58 del Título IV de la presente ley.”

Artículo 18º - Modifícase artículo 62 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 62. Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que:

- a) recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32, o en violación a los requisitos establecidos en el artículo 16 bis;
- b) habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 39;
- c) recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 16 ter y 44 bis de la presente;
- d) incumplieran con las obligaciones sobre los deberes de publicación de la información dispuesta en los artículos 44 ter y quáter de la presente;
- e) contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43;

f) no restituyeren, dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral, el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña.

g) los informes de campaña no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los fondos recibidos, para desenvolvimiento institucional y para campaña, respectivamente”.

Artículo 19º - Modifícase el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 63. — El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:

a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral, o aceptar contribuciones prohibidas.

b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos, ni identificar fehaciente al donante y/o la trazabilidad del aporte.

Artículo 20º - Modifícase el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 66. - Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículo 15, 16, 16 ter y 44 bis de la presente ley”.

CAPITULO II.

MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Artículo 21º - Modifícase el primer párrafo del inciso c) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

"ARTÍCULO 81: ...c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales y a las instituciones comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas a través de los medios que permitan la identificación inequívoca del donante, y en las condiciones que determine la reglamentación”.

CAPITULO III.

MODIFICACION DE LA LEY DE DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL

Artículo 22º - Modifícase el artículo 31 de la Ley 26571, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 31. — La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia a partir de la oficialización de la lista de candidatos ante la JUSTICIA ELECTORAL y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

Artículo 23º - Derógase el artículo 33 de la Ley 26571.

Artículo 24º - Derógase el artículo 34 de la Ley 26571

CAPITULO IV.

MODIFICACION DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

Artículo 25º - Modifícase el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 64 bis: Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia con la oficialización de la lista de candidatos ante la Justicia Electoral y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo”.

Artículo 26º - Modifícase el artículo 64 ter del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 64 ter. Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de la oficialización de los candidatos ante la Justicia Electoral.

La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de comunicación

(televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de la oficialización de los candidatos ante la JUSTICIA ELECTORAL. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la ley.”

Artículo 27º - Modifícase artículo 64 quater del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el Capítulo III bis del Título III de la ley 26.215 al partido, o alianza oficialista. Dichos espacios se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, dicho partido o alianza tampoco podrá contratar espacios publicitarios de manera privada.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 28º - La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el Registro de Trazabilidad de Aportes a Partidos Políticos creado mediante el artículo 16 ter dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 29º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.- Rodolfo J. Urtubey.- Dalmacio E. Mera.- Julio C. Catalán Magni.- Carlos A. Caserío.

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

Los modos de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales se revelan actualmente como cuestiones centrales en la vida de las democracias representativas occidentales. El uso de los recursos económicos es un elemento imprescindible para la competencia democrática; sin embargo, el dinero puede introducir distorsiones importantes en dicho proceso.

Las posiciones sobre la regulación difieren según tradiciones y contextos. Suecia, por ejemplo, con un largo historial de instituciones democráticas, en su Constitución no recoge ninguna codificación de los partidos políticos, carece de leyes que regulen la actividad de los partidos o su funcionamiento organizativo y la legislación que regula los ingresos de los partidos se introdujo por primera vez en 2014. En el otro extremo se encuentra España: tras la dictadura franquista, desarrolló una sólida tradición en lo que respecta a la regulación de los partidos políticos, que se refleja en las distintas leyes sobre la actividad de éstos.

Los escándalos por problemas en el financiamiento de las campañas, no obstante, atraviesan todos los países y tradiciones. España, Francia, Grecia y el Reino Unido (RU), por ejemplo, han combatido escándalos sobre financiamiento político cifrados en millones de euros relativos al abuso de fondos gubernamentales, la entrada de donaciones ilegales en los partidos o el “dinero negro” destinado a comprar favores de políticos electos. En la práctica, la mera existencia de prohibiciones de las contribuciones no garantiza que, efectivamente, se estén cumpliendo las normas ni que no se produzcan flujos financieros fuera de la zona regulada, en particular cuando los mecanismos de aplicación y las sanciones son deficientes. Es el caso de Portugal, Francia y Grecia, donde se siguen realizando donaciones ilegales a partidos y candidatos, y la elusión de las normas es algo habitual. Prácticamente en todas partes los expertos y analistas insisten en que los informes oficiales solo reflejan una parte del gasto real. (IDEA International)

Según Transparencia Electoral, en Argentina, la campaña presidencial de 2015 costó casi diez veces más que el máximo estipulado, 172 millones de pesos. Otras fuentes señalan que el costo de los grandes partidos osciló entre los 1000 y los 1500 millones de pesos.

Los contextos dinámicos y los cambios sociales y económicos demandan periódicas revisiones del sistema en democracias consolidadas, ya sea a través de modificaciones normativas (Francia), o fallos judiciales (EEUU). Hoy, la regulación del financiamiento demanda reforzar estrategias que velen por un sistema eficiente y transparente. La prohibición de los aportes privados, por ejemplo, ha terminado propiciando una mayor opacidad del sistema, al punto que los informes de algunos partidos no han sido aprobados por la Justicia. Las experiencias internacionales dejan interesantes conclusiones, que sirven como base a la hora de encarar la reforma del sistema de financiamiento en nuestro país. No obstante, es necesario aclarar que ningún sistema ha logrado dar todas las respuestas a los problemas que se presentan. No obstante, destacamos las siguientes:

- El financiamiento debe ser mixto, para permitir la participación en igualdad de condiciones e impulsar la institucionalidad de las organizaciones partidarias.
- Las restricciones excesivas a los aportes privados han demostrado ser negativas, incluso en las democracias más desarrolladas. Esto es así porque es difícil controlar de manera efectiva su cumplimiento; porque los límites excesivos incentivan las prácticas opacas del sistema; y porque resulta en un límite a la libertad de expresión y asociación.
- El fortalecimiento de los aportes privados aligera las cargas sobre los contribuyentes (por aportes públicos), especialmente en épocas de crisis.

La reforma que hoy proponemos se centra en tres cuestiones que creemos deben ser revisadas: la habilitación de aportes por parte de empresas y sindicatos; la prohibición de los aportes en efectivo, debido a que resulta imposible trazar el origen de esos fondos; la creación de un sistema de trazabilidad de los aportes; y la transparencia y publicación de toda la información antes de la realización del acto electoral.

Respecto del financiamiento privado, proponemos una reforma que tiene por objetivo fomentar las donaciones a través de diversos mecanismos, tales como: elevar el límite para los aportes privados incluyendo nuevos actores; ampliar los incentivos a las donaciones por deducción del Impuesto a las Ganancias; y fortalecer el mecanismo de transparencia sobre todo el proceso de financiamiento.

El financiamiento privado prevalece en los sistemas inglés, americano y canadiense. En el caso de EEUU, en un ciclo electoral normal el 79% de las donaciones proviene de individuos, 13% de empresas y asociaciones y 8% son fondos públicos. Asimismo, la Corte Suprema americana, a través de distintos fallos (1976 *Buckley v. Vadeo*; 2010 *Citizens United v. Federal Election Commission* y 2014, *Mc Cutcheon v. FEC*) ha ido elevando los límites y limitando restricciones a los aportes, propiciando la transparencia y el desarrollo de leyes claras que los regulen. Actualmente, en Italia se pueden deducir hasta un 26% del monto de las donaciones del impuesto a la renta para montos menores a 30.000 euros, suprimiendo progresivamente el aporte público directo a los partidos. Este tipo de medidas tiene como fin promover el mayor compromiso ciudadano en el tema. En la mayoría de los países de Europa Oriental, Central y Sudoriental y de Asia Central no existen límites en cuanto a las donaciones corporativas a candidatos o partidos políticos. Las únicas excepciones son Bulgaria, Polonia y Rusia. (IDEA International)

Finalmente, consideramos que es fundamental establecer la trazabilidad de los aportes y crear mecanismos obligatorios de información al electorado.

La Cámara Nacional Electoral ha solicitado prohibir las contribuciones en efectivo por considerarlas uno de los grandes enemigos de la transparencia. El proyecto los prohíbe. Asimismo, establece la creación del Registro de Trazabilidad de los Aportes Electorales, que alcanzará a personas humanas y jurídicas, que se implementará a través de la AFIP. Esta información estará a disposición de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, establece un mecanismo para que los partidos rechacen los aportes cuyo origen es sospechoso. Esa información debe ponerse a disposición del público y su omisión es sancionada.

El estudio de casos demuestra que el sistema de divulgación pública sobre financiamiento privado es débil en la región. No obstante, la revelación de esta información es un valor intrínseco para la democracia. No basta con una normativa que haga mención a la presentación de auditorías o intervención posterior de la justicia, como existe hoy en Argentina, Brasil, México, Perú y Panamá. Es necesario evitar el financiamiento oculto.

Los beneficios sociales de la divulgación de las fuentes de financiamiento de los actores políticos superan con creces el derecho a la protección de la privacidad de los donantes. Asimismo, promueve una relación de confianza y mayor responsabilidad con el electorado. Por ello proponemos: establecer explícitamente el carácter público de la información de financiamiento (publicación de contribuciones y gastos); y que antes de la realización de los comicios, el/la candidato/a o el partido debe hacer pública toda la información sobre los aportes privados recibidos. En este sentido, queda prohibido todo tipo de donaciones “secretas” o “anónimas”. Este modelo funciona en Inglaterra, donde, a través de distintos medios y organizaciones se informa a la ciudadanía sobre los modos de donar y se advierte a los candidatos sobre los riesgos legales de aceptar donaciones de fuentes desconocidas, o cuyo origen no pueda ser explicado, lo que es castigado con penas altas.

Con la convicción de que es necesario revisar nuestra actual legislación solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Miguel A. Pichetto.- Rodolfo J. Urtubey.- Dalmacio E. Mera.- Julio C. Catalán Magni.- Carlos A. Caserío.



Buenos Aires, 30 de octubre de 2018

Señora

Presidenta del H. Senado de la Nación

Lic. Gabriela Michetti

S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el Proyecto de Ley de mi autoría que tramita bajo el expediente N° S-3698/18.

En ese sentido, le informo que se ha deslizado un error involuntario en la redacción del artículo 20, por lo que le solicito se lo modifique de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 20° - Modifícase el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 66. - Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículo 15, 16, 16 ter y 44 bis de la presente ley”.

Sin otro particular la saludo atentamente.

Dr. MIGUEL ÁNGEL PICHETTO
SENADOR DE LA NACION

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase como artículo 7 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 7 bis.- Aportes extraordinarios. Los partidos políticos reconocidos podrán solicitar al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, aportes extraordinarios, destinados a cubrir gastos no electorales y no contemplados en el desenvolvimiento institucional ordinario del partido político. La solicitud debe acompañarse del detalle de la actividad a realizar, su justificación y el presupuesto del gasto previsto.

El MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA deberá otorgar o rechazar las solicitudes formuladas mediante resolución fundada. Los partidos políticos deben acreditar el destino de los gastos efectuados con los aportes extraordinarios en oportunidad de presentar el balance anual de su patrimonio previsto en esta Ley.

Los partidos políticos no podrán recibir aportes extraordinarios cuando en ese ejercicio contable se le hubieran ordenado aplicar sanciones originadas en sentencias judiciales de ese o anteriores periodos, que impliquen la pérdida del derecho a percibir financiamiento público por el incumplimiento de disposiciones previstas en esta Ley o en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.”

ARTÍCULO 2º.- Sustituyese el artículo 16 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 16.- Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario aportes para desenvolvimiento institucional de una misma persona humana o jurídica superiores al monto equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de

aportes privados y publicará esa información en el sitio web de la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.”

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 16 bis.- Aporte en dinero. Los aportes en dinero deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deben informar a la agrupación política destinataria del aporte, la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por parte de este último.

En el caso de recibir contribuciones prohibidas o que excedan los montos máximos previstos en esta Ley, la agrupación política deberá rechazar y revertir la operación en el término de DIEZ (10) días hábiles de recibida la misma. En caso de no resultar posible la identificación del donante a los fines de la reversión de la operación, dichos aportes serán girados con destino al Fondo Partidario Permanente administrado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, establecido en el artículo 6 de la presente Ley.”.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 22.- Ejercicio contable. El cierre del ejercicio contable anual de los partidos políticos es el día 31 de diciembre. Su incumplimiento importará las sanciones previstas en el artículo 66 tercer párrafo de la presente Ley.”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 27.- Responsables económico-financieros de la agrupación. Los partidos políticos en la primera presentación ante el Juzgado Federal con competencia electoral efectuada en relación con su participación en el proceso electoral, y las alianzas electorales en su acuerdo constitutivo, designarán DOS (2) responsables económico-financieros para las elecciones generales, debiendo en todos los casos ser mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliados al partido político o, en su caso, a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza. Uno de los responsables económico-financiero deberá ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que conforman la alianza y el otro deberá contar con matrícula profesional vigente de Contador Público.

Los designados deben concurrir personalmente ante el juez electoral correspondiente para aceptar el cargo, bajo promesa de desempeñarlo

fielmente con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, y constituir domicilio electrónico.

En todo lo referente a la campaña electoral, el responsable económico-financiero tendrá a su cargo las obligaciones descriptas en el artículo 19 de esta Ley, siendo solidariamente responsable con el tesorero de la agrupación política, por el cumplimiento de la normativa que le resulte aplicable.

En el caso de imposición de sanciones personales al responsable económico-financiero que reviste la calidad de contador público, el juez electoral aplicará en forma accesorio y por el mismo plazo de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, debiendo notificar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente la suspensión de la matrícula profesional. ”

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 43 quáter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 43 quáter.- Servicios de Comunicación Audiovisual. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales.”

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 44 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 44.- Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado para campaña electoral todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinada al financiamiento de gastos electorales.

En relación con los aportes en dinero o en especie para campaña electoral, rigen idénticas disposiciones respecto a los aportantes prohibidos, a los instrumentos financieros habilitados para realizar los aportes y a la modalidad del aporte en especie, a las establecidas en esta Ley para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos.

Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación que, incorporando la tecnología existente, tiendan a que los aportes de campaña a las agrupaciones políticas, se lleven a cabo a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.”

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 44 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 44 bis.- Límite de recursos privados por agrupación, y montos máximos de aportes privados de campaña por persona. Las agrupaciones políticas podrán recibir, con motivo de la campaña electoral, un total de recursos privados que no supere el monto equivalente a la diferencia, entre el tope máximo de gastos de

campaña fijado por esta Ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente a la agrupación.

Las agrupaciones políticas podrán recibir aportes para una campaña electoral de una misma persona humana o jurídica, montos que no superen el DOS POR CIENTO (2%) de los gastos permitidos para esa campaña.

Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la CÁMARANACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos el límite de aportes privados para campaña permitidos y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.”

ARTÍCULO 9°.- Incorpórase como Capítulo IV ter del Título III de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:“CAPÍTULO IV ter Del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña”

ARTÍCULO 44 quinquies.- Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. Créase el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, el cual funcionará bajo la órbita de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

ARTÍCULO 44 sexies.- Las agrupaciones políticas sólo podrán contratar la provisión de espacios de publicidad en vía pública para campañas electorales con los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña.

ARTÍCULO 44 septies.- Actualización del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. La CÁMARA NACIONALELECTORAL mantendrá actualizada la información del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral, para conocimiento de las agrupaciones políticas y de la ciudadanía.”

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 61 de la ley Ley 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 61. Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por las agrupaciones políticas al Cuerpo de Auditores de la CÁMARANACIONAL ELECTORAL, el cual realizará la auditoría en el plazo máximo de NOVENTA (90) días de recibido los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá traslado a la agrupación política correspondiente para que un plazo de DIEZ (10) días de recibido el mismo responda las observaciones o requerimientos formulados, bajo apercibimiento de resolver en el estado de la causa, previa vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

En caso de alianzas, asimismo, se dará traslado a los partidos políticos que la integren.

Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de QUINCE (15) días de recibido los mismos. De este informe se dará traslado por CINCO (5) días a la agrupación política. Contestado el traslado o

vencido el plazo dispuesto, el juez electoral resolverá, previa vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Vencidos los plazos previstos en los párrafos 1° y 3° del presente artículo, sin que el cuerpo de auditores haya producido el respectivo dictamen, el juez electoral podrá dictar resolución, previa vista al Ministerio Público Fiscal.

Las presentaciones que realice la agrupación política en el marco de las causas de control patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el tesorero y responsables económicos financieros del partido político y en el caso de la alianza por los responsables económico-financieros.

Si en el procedimiento que aquí se regula se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral. En ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario. ”

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 62.- Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de UNO (1) a CUATRO (4) años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por UNA (1) a DOS (2) elecciones, los partidos políticos cuando:

- a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32 de esta Ley, o que se trate de fondos no bancarizados;
- b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 39 de esta Ley;
- c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 44 bis de esta Ley;
- d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta Ley;
- e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43 de esta Ley;
- f) No restituyeran, dentro de los NOVENTA (90) días de realizado el acto electoral, el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña;
- g) Los informes de los artículos 23 y 58 de esta Ley, no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los fondos recibidos, para desenvolvimiento institucional y para campaña respectivamente.”

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 66.- Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona humana o jurídica que efectúe donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente Ley.

Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15, 16 y 44 bis de la presente Ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente Ley. Asimismo, la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el decuplo de dicho monto, los proveedores en general, que violen lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley.

Las personas humanas, que actúen en nombre propio, o en calidad de propietarios, directores y gerentes o representantes de personas jurídicas, que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo, serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.”

ARTÍCULO 13.- Incorpórase como artículo 66 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 66 bis.- Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta TREINTA (30) días los estados contables anuales.

Desde los TREINTA Y UNO (31) y hasta los NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega de los estados contables anuales, la multa se triplicará.

Transcurridos NOVENTA (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de QUINCE (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.”

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 67.- Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta TREINTA (30) días el informe final de campaña.

Desde los TREINTA Y UNO (31) y hasta los NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega del informe, la multase triplicará.

Transcurridos NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de QUINCE (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.

Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO(10%) de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que incumplieren con la presentación del informe previo de campaña.

En el caso de las alianzas, la multa se aplicará a los partidos integrantes de las mismas, en los mismos porcentajes que se establecieren para el acuerdo económico financiero plasmado en el acta de su constitución.”

ARTÍCULO 15.- Incorpórase como artículo 67 ter de la Ley N° 26.215y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 67 ter.- Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, por un período de UNA (1) a CUATRO (4)campañas electorales, quienes proveyeran bienes o servicios a las agrupaciones políticas incumpliendo las prescripciones del Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.

Será sancionada con multa de igual monto que el gasto efectuado y hasta el décuplo de dicho monto, la agrupación política que contratare la provisión de bienes y servicios para la campaña electoral en violación a lo dispuesto en el Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.”

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 71.- Para el juzgamiento de las infracciones a la presente Ley cometidas por las agrupaciones políticas y otras personas jurídicas, se aplica el procedimiento establecido en la Ley N° 23.298 y sus modificatorias y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En todos los casos actuará como tribunal de alzada la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, cuyas decisiones sólo serán

recurribles por vía del recurso extraordinario establecido en el artículo 14 de la Ley N° 48 y sus modificatorias.”

ARTÍCULO 17.- Incorpórase como artículo 75 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 75 bis.- Provisión de Información a la Justicia Nacional Electoral. La JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL podrá requerir toda la información que estime necesaria para la realización de los controles patrimoniales ordinario y de campaña a su cargo, especialmente a los fines de investigar hechos o actos de financiamiento de los partidos políticos que involucren recursos de procedencia ilícita, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos previstos en el artículo 13, inciso 3), de la Ley N° 25.246. El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la PROCURADURÍA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y todo otro organismo público que sea solicitado, deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia efectúe la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL de manera pronta y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal.”

ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 75 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 75 ter.- Adhesión al régimen nacional de financiamiento. La CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES y las provincias que realicen sus elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad previsto en la Ley N° 15.262, podrán adherir al régimen de financiamiento de campañas electorales establecido en la presente Ley, así como al régimen de campañas electorales establecido en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.”

TÍTULO II

Capítulo único

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL Ley N° 19.945

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 64 quater. - Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten

Queda prohibido durante los TREINTA (30) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.”

ARTÍCULO 20.- Incorpórase como artículo 140 bis del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 140 bis.- Sanciones a funcionarios. Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años e inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ (10) años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al funcionario público que realice alguna de las siguientes acciones:

- a. Coaccione o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.
- b. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.”.

ARTÍCULO 21.- Incorpórase como artículo 140 ter del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 140 ter.- Clientelismo. Será reprimido con prisión de SEIS(6) meses a TRES (3) años e inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ(10)años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al que ofreciere, prometiére o entregare dinero o cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de determinada manera, en elecciones primarias, generales o internas de los partidos políticos.”.

ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Capítulo III Procedimiento electoral sancionador”

ARTÍCULO 146.- Los Jueces Federales con competencia electoral conocerán, de las faltas, delitos y demás infracciones e ilícitos electorales, en primera instancia, con apelación ante la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Estos procesos así como los dirigidos a determinar responsabilidades personales por infracciones a las Leyes N°26.215, N° 26.571 y sus respectivas modificatorias, que no tengan un régimen procesal establecido, estarán regidos por esta Ley, y en lo que no se oponga a ella, por el Código Procesal Penal.

Artículo 146 bis.- El Juez Federal con competencia electoral de cada distrito conocerá de las infracciones que se cometan, o tengan efectos, en su jurisdicción territorial.

Cuando un hecho tenga efectos en más de un distrito electoral, será competente el juez de aquel en el que se cumplió el último acto de ejecución.

Si se ignora en qué distrito se cometió la infracción, será competente el tribunal que prevenga en la causa.

ARTÍCULO 146 ter.- Las contiendas de competencia serán dirimidas por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL de acuerdo con las reglas del Código Procesal Penal.

Los jueces y representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán excusarse, y podrán ser recusados, en las circunstancias previstas por la Ley N° 19.108 y sus modificatorias y el Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 146 quater.- La acción en los procesos regulados por esta Ley es pública y está a cargo del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con competencia electoral, quien impulsará la acción durante todo el proceso.

Para las audiencias sostenidas fuera de la jurisdicción territorial de dicho representante, la acción podrá ser impulsada por un representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con competencia territorial donde la audiencia se realice.

No se admitirán querellantes particulares.

ARTÍCULO 146 quinquies.- El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tendrá para la investigación preparatoria de los procesos regidos por esta Ley las facultades previstas por el artículo 212 del Código Procesal Penal.

Durante el día en que se realizan elecciones, las atribuciones y facultades vinculadas con el normal desenvolvimiento del comicio, aquí establecidas para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, serán ejercidas por las Juntas Electorales Nacionales.

ARTÍCULO 146 sexies.- El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá por sí mismo disponer el archivo de las actuaciones si es manifiesta la imposibilidad de identificar al autor o partícipes del ilícito o de encontrar suficientes elementos de convicción, o si considera que el hecho investigado no constituye un ilícito. En estos casos, la investigación podrá ser reabierta si se encontraran nuevos elementos.

ARTÍCULO 146 septies.- El juez se limitará al control de legalidad delo actuado por el fiscal en la etapa preparatoria y proveerá las medidas de prueba que éste no pueda producir por sí mismo.

El juez no impulsará la investigación ni dictará auto de procesamiento, elevación a juicio, ni ningún otro auto que implique pronunciarse de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado.

Todas las peticiones o planteos de las partes que deban ser debatidas se resolverán en audiencias orales y públicas.

ARTÍCULO 146 octies.- Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado, deberán ser solicitadas por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y decididas por el Juez Federal con competencia electoral de la jurisdicción o en su defecto el Juez Federal más próximo.

ARTÍCULO 146 nonies.- Cuando el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL reuniera, a su juicio, los elementos suficientes, formulará por escrito la acusación contra el imputado, que deberá contener:

- a) La individualización del acusado;
- b) La relación precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen;
- c) El ofrecimiento de las pruebas para la instancia de juicio oral y público; y,
- d) La calificación legal de los hechos.

ARTÍCULO 146 decies.- El imputado tendrá CINCO (5) días para ofrecer la prueba de descargo que no se hubiere producido hasta entonces.

ARTÍCULO 146 undecies.- El juez valorará la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes de acuerdo con el artículo 356 y concordantes del Código Procesal Penal en audiencia de previo y especial pronunciamiento.

Si el imputado hubiera planteado durante el curso del proceso la nulidad de algún acto y ésta no hubiera sido saneada, la cuestión será decidida por el juez en la misma audiencia.

ARTÍCULO 146 duodecies.- La audiencia de juicio se llevará a cabo bajo las reglas de los artículos 363 a 395 del Código Procesal Penal. El Juez Federal con competencia electoral actuará como tribunal de juicio unipersonal.

Si el Juez Federal que conoció en la instrucción se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante por otro Juez Federal de la misma jurisdicción.

ARTÍCULO 146 terdecies.- En la audiencia de juicio, el imputado podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. El juez decidirá sobre

la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada pudiendo aplicar medidas sustitutivas de la prisión, multa o inhabilitación.

Si en la audiencia de juicio el imputado acepta los hechos de la acusación, el juez dictará sentencia sin más trámite, pudiendo rebajarla sanción hasta en DOS TERCIOS (2/3) del mínimo legal.

ARTÍCULO 146 quaterdecies.- Las resoluciones interlocutorias dictadas durante el curso de las audiencias serán recurribles mediante recurso de reposición.

Sólo son recurribles ante la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL:

a) La sentencia definitiva y los autos que pongan fin a la acción o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la suspensión del juicio a prueba. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá recurrir en el caso de la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado a la mitad o más de la escala prevista para el ilícito electoral y de la sentencia condenatoria cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida;

b) El auto de prisión preventiva;

c) Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado.

ARTÍCULO 146 quincecies.- La etapa preparatoria no puede llevar más de SEIS (6) meses contados desde el primer acto de la investigación.

Cumplido dicho plazo, el juez intimará al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quien podrá optar entre:

a) Formular la acusación con los elementos disponibles;

b) Archivar las actuaciones; o

c) Solicitar una única prórroga que será concedida por el juez en caso de existir elementos suficientes que permitan suponer que podrán encontrarse nuevos elementos de prueba.

Si esta prórroga fuera rechazada, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá formular la acusación con los elementos de los que disponga.

ARTÍCULO 146 sexdecies.- La acción en los procesos regulados por esta Ley se extingue por:

a) La muerte del investigado;

b) Prescripción;

c) Amnistía; y

d) El desistimiento del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

ARTÍCULO 146 septendecies.- Los plazos de la prescripción y las causales de suspensión e interrupción de dicho plazo son los establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina. A estos efectos, se considerará que los incisos b), c) y d) del artículo 67 del Código Penal hacen referencia a la formulación de la acusación prevista en el artículo 146 nonies del presente Código.

ARTÍCULO 146 octodecies.- Cuando un mismo hecho configurara un delito electoral y otro delito penal, el proceso tramitará según las reglas del Código Procesal Penal. El Juez Federal con competencia electoral actuará como Juez de Instrucción.

Cuando en un proceso regulado por esta Ley se detectara la posible comisión de un delito penal no electoral, el juez actuante remitirá copias certificadas al fuero competente.”

TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO LEY N° 19.108

ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de la Ley N°19.108, y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) Organizar en su sede un Cuerpo de Auditores Contadores conformado por un auditor coordinador y una cantidad de miembros no inferior a un auditor contador por cada distrito electoral, para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables. A estos fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO(10%) del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional y con los recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA en caso de no cubrirse el mínimo establecido. El fondo estará destinado a financiar los gastos derivados de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales, y toda erogación orientada al control del financiamiento de las agrupaciones políticas. Trimestralmente el tribunal verificará haber percibido al menos UN CUARTO (1/4) de dicho monto mínimo y en caso de no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA a fin de que sea completada”.

TÍTULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 24.- Las agrupaciones políticas deben adecuar sus Cartas Orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento a las prescripciones dispuestas en la presente Ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su entrada en vigencia, siendo a partir del vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 25.- Créanse DIECISIETE (17) cargos de Auditores, con categoría presupuestaria de Prosecretario Administrativo que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores Contadores de la CÁMARANACIONAL ELECTORAL.

ARTÍCULO 26.- Las disposiciones que se establecen con la modificación por esta Ley, del Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional, se aplicarán a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia.

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA reorganizarán sus dependencias y adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones que por las modificaciones del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL en esta Ley, se les asignan.

ARTÍCULO 27.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará el texto ordenado de la Ley N° 26.215 y del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días desde la entrada en vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 28.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Olga I Brizuela y Doria.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Maria B. Tapia.- Julio C. Martínez.- Silvia B. Elías de Pérez.- Pamela F. Verasay.- Gladys E. González.- Mario R. Fiad.- Humberto L.A. Schiavoni.- Claudio J. Poggi. -

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de poner a consideración del Honorable Senado de la Nación, el presente Proyecto de Ley tendiente a modificar el Régimen para el Financiamiento de los Partidos Políticos.

El mismo, surge de un trabajo consciente y consensuado entre distintas fuerzas políticas y la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, habiéndose recogido también las recomendaciones de distintas ONGs dedicadas a la materia; y viene a dar respuesta a la imperiosa necesidad de avanzar en materia de transparencia en el financiamiento de la actividad política: el origen y destino de los fondos utilizados por los partidos políticos, la equidad en su distribución y la posibilidad de acceso al financiamiento, como elementos fundamentales para la equidad en la competencia electoral, la autonomía de los representantes respecto al poder económico, fueron algunos de los tópicos que se pretende abordar con la presente propuesta.

La Ley N° 25.600 primero, derogada luego por la Ley N° 26.215, y las posteriores reformas introducidas por Ley 26.571, generaron un

cambio radical en lo que hace al financiamiento, transparencia y control patrimonial de la actividad de los partidos políticos, pero la experiencia nos viene marcando la insuficiencia de los esfuerzos realizados en el sentido de lograr el ideal de transparencia y equidad necesarios para el fortalecimiento del sistema democrático.

En tal sentido, es evidente que las herramientas contenidas en el marco legal vigente no han sido eficientes para el logro de los objetivos propuestos, frente a una sociedad civil que demanda y exige el máximo esfuerzo a la hora de recuperar la confianza en el sistema electoral, en los partidos políticos, y en definitiva en el propio sistema de representación política.

Es con ese espíritu que hemos avanzado en la propuesta que hoy traemos a consideración para la modificación del régimen de financiamiento de la política argentina; agregando además una propuesta de reforma a algunas normas del Código Electoral Nacional. El presente proyecto de ley propone la bancarización de los aportes a los partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Los informes presentados ante la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL revelan que la inmensa mayoría de los aportes privados a los partidos políticos, se realizan en efectivo. Como ha señalado la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, en materia de financiamiento “se destaca con particular relevancia la necesidad de que la ciudadanía tome debido conocimiento del origen y destino del dinero de los partidos políticos.”(cf. Fallo CNE 3010/2002). Es evidente que los aportes en efectivo presentan un obstáculo tan importante como injustificable para el logro de este objetivo. En consecuencia, el Proyecto de Ley prohíbe los aportes en efectivo y establece taxativamente los mecanismos habilitados, para garantizar que el dinero de los aportes sea registrado y su origen fácilmente identificable.

Poder controlar la veracidad de los gastos declarados por los partidos en el marco de una campaña electoral requiere también la introducción de herramientas idóneas. En este sentido, resulta crucial que quienes controlan el financiamiento de la política puedan acceder en forma expeditiva e integral a la información que poseen diferentes organismos de control. Para ello, se plantea la obligación de todos los organismos que sean requeridos por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL de brindar en forma completa y clara toda la información que sea solicitada por ésta, a efectos de determinar el origen y destino de los fondos de los partidos políticos.

Para avanzar en este mismo objetivo, se establece que quienes pretendan proveer servicios de publicidad en vía públicas e inscriban en un registro específico, que administrará y controlará la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. De esta manera se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas y la justificación de gastos no realizados.

Por otra parte ,el Proyecto propone la eliminación de la prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes de campaña. Precisamente

esta prohibición se encuentra entre las medidas introducidas en los últimos años que no han mostrado resultados positivos, en tanto no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad. En cambio, existe un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos y que la principal consecuencia de esta restricción consistió en un aumento de la opacidad en el financiamiento. Frente a la restricción jurídica, tal como lo advierten los estudios sobre este tema, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha hecho sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público (Julia Pomares, Marcelo Leiras, María Page, Soledad Zárate y Josefina Mignone, “Reforma electoral 2016: Propuestas para fortalecer la equidad y la transparencia de las elecciones”, Documento de Políticas Públicas / Recomendación N°171, Buenos Aires: CIPPEC, agosto 2016; Pág. 10).

Antes que prohibir la posibilidad de contribuir financieramente con una campaña, resulta fundamental que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los que aportan a las diferentes fuerzas políticas. La transparencia electoral requiere admitir estos aportes, estableciendo controles eficaces y a la vez topes para que una sola persona, o un pequeño conjunto de personas —humanas o jurídicas—, no pueda constituirse en el patrocinador excluyente de una campaña.

Es por eso que el Proyecto de Ley propone permitir también para las campañas electorales los aportes de personas jurídicas, hasta hoy permitidos sólo para desenvolvimiento institucional, pero manteniendo límites estrictos respecto a los montos que cada persona puede contribuir a una agrupación. Fortalecer la transparencia en este terreno exige contar con una legislación que no pretenda a forzar la realidad, sino que, estableciendo parámetros realistas, apunte a que el electorado pueda conocer cómo se financian las campañas e incorporar esa información a su evaluación sobre los partidos y candidatos.

También a partir de la experiencia reciente se propone una reducción del tiempo que los servicios de comunicación audiovisual deben ceder para fines electorales. La distribución de estos espacios entre las agrupaciones políticas a partir de la Ley N°26.571 tuvo por objeto mejorar la equidad de los procesos electorales y alentar el voto informado de la ciudadanía. Sin embargo, el porcentaje de tiempo establecido por la Ley, del DIEZ POR CIENTO (10%) del total de programación, se mostró excesivo, resultando muchas veces abrumador al punto de generar confusión y hartazgo en gran parte del electorado. Esto terminó por conspirar contra los objetivos de la medida. En lugar de alentar a que los ciudadanos conozcan las diversas propuestas ofrecidas por las agrupaciones políticas, los espacios de publicidad electoral de vinieron, para muchos ciudadanos, en motivo de hastío con el proceso electoral. A partir de ello, este proyecto plantea conservar el principio de equidad en la distribución de espacios, pero reduciendo al CINCO POR CIENTO (5%) del total de programación el tiempo destinado a la publicidad electoral. De este modo, la distribución de espacios gana en razonabilidad, propiciando así el logro más efectivo de sus objetivos iniciales.

El Proyecto de Ley fija además criterios para evitar la discrecionalidad en la distribución de los aportes extraordinarios para cubrir gastos no electorales, y excluye de la posibilidad de acceder a éstos a los partidos que estén cumpliendo sanciones con motivo de la violación de normas vinculadas al régimen de financiamiento. De este modo se fortalece la equidad en la distribución de fondos públicos, mientras que se pone fin a la práctica de compensar la pérdida de aportes como resultado de las sanciones con el acceso a estos aportes extraordinarios.

Con el objeto de propiciar la rigurosidad, profesionalidad y veracidad de los informes presentados por los partidos sobre sus aportes y gastos de campaña, se impone a las agrupaciones políticas que compiten en elecciones que designen en carácter de responsables económico-financieros a una autoridad partidaria ya un Contador Público matriculado, previendo para ambos como sanción la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y específicamente para el Contador Público la inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

La propuesta ofrece, asimismo, una respuesta frente a otro aspecto habitualmente señalado como problemático de nuestro régimen legal en materia de financiamiento, que refiere a la realización de elecciones nacionales y provinciales en forma simultánea, pero con diferentes regímenes de financiamiento, lo cual dificulta el cumplimiento efectivo de la normativa y torna frecuentemente opaco el origen y destino de los fondos que las agrupaciones utilizan para las campañas.

Por eso, dentro del marco que permite nuestro régimen federal, se propone incorporar la opción para que cuando las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adhieran al régimen de simultaneidad de elecciones de la Ley N° 15.262, puedan también adherir al régimen de financiamiento previsto por la normativa nacional, así como a la regulación de campañas del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL. Esta adhesión permitiría homogeneizar la normativa vigente y aplicable a lo que en los hechos es una misma campaña electoral, aunque refiera a cargos de diferentes niveles de gobierno. De este modo se clarifica el escenario para todos los actores involucrados, desde los partidos y la justicia hasta la sociedad en general.

El Proyecto de Ley también incorpora una serie de modificaciones en el régimen de campañas electorales, regulado en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

La equidad en materia de campañas electorales es indudablemente un elemento crucial para la calidad democrática. Durante muchos años los argentinos nos acostumbramos a que el aparato del Estado se utilizara masiva y explícitamente para favorecer a las candidaturas del partido al que pertenecen las autoridades del gobierno en ejercicio. Esto incluyó muy especialmente el uso de la publicidad oficial como un instrumento de propaganda, que se acentuaba en los períodos electorales, promoviendo a los líderes y candidatos del partido

gobernante y denostando a los opositores. Incluyó también la utilización en forma cotidiana de los presupuestos de las oficinas públicas para promover actividades partidarias y candidatos del oficialismo. En consecuencia, es preciso establecer las condiciones legales que impidan la reiteración de estos comportamientos que avasallan la equidad democrática.

Es por ello que el Proyecto de Ley que presentamos, propone duplicar el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que pudieran promover la captación del sufragio, extendiéndolo de QUINCE (15) a TREINTA (30) días.

Por otra parte, se establecen severas sanciones para los funcionarios que utilicen los recursos y facultades a su cargo con fines partidarios. En el mismo sentido, se tipifican los actos de clientelismo, estableciendo sanciones para quienes ofrecieren beneficios económicos a cambio de la adhesión electoral. Si bien la normativa vigente hace posible perseguir y sancionar este tipo de prácticas, como ha dicho la propia CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, ello “no suple la necesidad de contar con normas específicas que contemplen consecuencias de carácter sancionatorio para los autores de conductas como las denunciadas en autos.”(en referencia a conductas de clientelismo).A partir de ello la Cámara recomienda “una tipificación más precisa de esta clase de conductas”.(Fallos CNE 3605/2005).

Entre las modificaciones previstas por este Proyecto de Ley tendientes a asegurar que las sanciones por faltas y delitos electorales puedan hacerse efectivas se encuentra la incorporación de un procedimiento específico para la tramitación de las causas por faltas y delitos electorales. La legislación actual carece de un procedimiento propio para la persecución de los ilícitos electorales, tal como lo requiere la materia. En particular la aplicación supletoria del procedimiento previsto en la Ley N°23.298 y sus modificatorias en el Código Procesal Penal de la Nación para la sanción de las conductas reprimidas por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215 y sus modificatorias supone una notable deficiencia procesal. La falta de una legislación certera sobre la materia de procedimientos para las sanciones electorales constituye un obstáculo para la aplicación eficaz de las sanciones previstas, a la vez que genera incertidumbre entre los actores involucrados respecto a la legislación aplicable. Por eso se propone la incorporación en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL de un procedimiento electoral sancionador, procedimiento que garantiza el respeto por los derechos políticos de los actores involucrados y el debido proceso en toda la causa, mientras a su vez permite dotar de herramientas idóneas y homogéneas a la justicia para sancionar los ilícitos electorales.

Finalmente, el proyecto fortalece al Cuerpo de Auditores de la Justicia Nacional Electoral encargado de auditar los informes de los partidos políticos. El control del financiamiento político es una tarea crecientemente compleja y que requiere de las capacidades y medios adecuados para su efectiva realización.

Ello supone la presencia de un Cuerpo de Auditores a la altura de la complejidad y volumen de esta problemática. La integración actual, portan sólo

OCHO (8) miembros, impide que la tarea de controlar el cumplimiento de las normas de financiamiento, tanto en la vida ordinaria como de campaña, pueda cumplirse en tiempo y forma. Por estos motivos el proyecto propone la creación de DIECISIETE (17) nuevos cargos de auditores, estableciendo una integración del cuerpo que incluye un Auditor Coordinador y una cantidad de miembros no inferior a un Auditor Contador para cada distrito electoral.

Estamos convencidos de que las reformas propuestas en el presente proyecto, junto con las otras propuestas que cuentan ya con estado parlamentario, sumado a los aportes que se realicen por parte de las distintas fuerzas políticas durante el debate en ambas cámaras del Congreso, fortalecerán la integridad y la transparencia de la actividad política en nuestro país, contribuyendo así a la construcción conjunta de una democracia más sólida y de mayor calidad.

En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento para la sanción del presente proyecto de ley.

Olga I Brizuela y Doria.- Silvia del Rosario Giacoppo.- María B. Tapia.- Julio C. Martínez.- Silvia B. Elías de Pérez.- Pamela F. Verasay.- Gladys E. González.- Mario R. Fiad.- Humberto L.A. Schiavoni.-

(III)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO

MODIFICACIONES A LA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS LEY N° 26.215

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como artículo 7 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 7 bis.- Aportes extraordinarios. Los partidos políticos reconocidos podrán solicitar al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, aportes extraordinarios, destinados a cubrir gastos no electorales y no contemplados en el desenvolvimiento institucional ordinario del partido político. La solicitud debe acompañarse del detalle de la actividad a realizar, su justificación y el presupuesto del gasto previsto.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA deberá otorgar o rechazar las solicitudes formuladas mediante resolución fundada. Los partidos políticos deben acreditar el destino de los gastos efectuados con los aportes extraordinarios en oportunidad de presentar el balance anual de su patrimonio previsto en esta Ley.

Los partidos políticos no podrán recibir aportes extraordinarios cuando en ese ejercicio contable se le hubieran ordenado aplicar sanciones originadas en sentencias judiciales de ese o anteriores periodos, que impliquen la pérdida del derecho a percibir financiamiento público por el incumplimiento de disposiciones previstas en esta Ley o en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.”.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 16.- Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario aportes para desenvolvimiento institucional de una misma persona humana o jurídica superiores al monto equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web de la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.”.

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 16 bis.- Aporte en dinero. Los aportes en dinero deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deben informar a la agrupación política destinataria del aporte, la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por parte de este último.

En el caso de recibir contribuciones prohibidas o que excedan los montos máximos previstos en esta Ley, la agrupación política deberá rechazar y revertir la operación en el término de DIEZ

(10) días hábiles de recibida la misma. En caso de no resultar posible la identificación del donante a los fines de la reversión de la operación, dichos aportes serán girados con destino al Fondo Partidario Permanente administrado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, establecido en el artículo 6 de la presente Ley.”.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 22.- Ejercicio contable. El cierre del ejercicio contable anual de los partidos políticos es el día 31 de diciembre. Su incumplimiento importará las sanciones previstas en el artículo 66 tercer párrafo de la presente Ley.”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 27.-Responsables económico-financieros de la agrupación. Los partidos políticos en la primera presentación ante el Juzgado Federal con competencia electoral efectuada en relación con su participación en el proceso electoral, y las alianzas electorales en su acuerdo constitutivo, designarán DOS (2) responsables económico-financieros para las elecciones generales, debiendo en todos los casos ser mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliados al partido político o, en su caso, a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza. Uno de los responsables económico-financiero deberá ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que conforman la alianza y el otro deberá contar con matrícula profesional vigente de Contador Público.

Los designados deben concurrir personalmente ante el juez electoral correspondiente para aceptar el cargo, bajo promesa de desempeñarlo fielmente con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, y constituir domicilio electrónico.

En todo lo referente a la campaña electoral, el responsable económico-financiero tendrá a su cargo las obligaciones descriptas en el artículo 19 de esta Ley, siendo solidariamente responsable con el tesorero de la agrupación política, por el cumplimiento de la normativa que le resulte aplicable.

En el caso de imposición de sanciones personales al responsable económico-financiero que reviste la calidad de contador público, el juez electoral aplicará en forma accesorio y por el mismo plazo de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, debiendo notificar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente la suspensión de la matrícula profesional. ”.

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 43 quáter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 43 quáter.- Servicios de Comunicación Audiovisual. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales.”

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 44 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 44.- Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado para campaña electoral todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinada al financiamiento de gastos electorales.

En relación con los aportes en dinero o en especie para campaña electoral, rigen idénticas disposiciones respecto a los aportantes prohibidos, a los instrumentos financieros habilitados para realizar los aportes y a la modalidad del aporte en especie, a las establecidas en esta Ley para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos.

Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación que, incorporando la tecnología existente, tiendan a que los aportes de campaña a las agrupaciones políticas se lleven a cabo a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.”.

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 44 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 44 bis.- Límite de recursos privados por agrupación, y montos máximos de aportes privados de campaña por persona. Las agrupaciones políticas no podrán recibir con motivo de la campaña electoral un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta Ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente a la agrupación.

Las agrupaciones políticas no podrán recibir aportes para una campaña electoral de una misma persona humana o jurídica por montos superiores al DOS POR CIENTO (2%) de los gastos permitidos para esa campaña.

Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos el límite de aportes privados para campaña permitidos y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.”.

ARTÍCULO 9º.- Incorpórase como Capítulo IV ter del Título III de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“CAPÍTULO IV ter

Del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña

ARTÍCULO 44 quinquies.- Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. Créase el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, el cual funcionará bajo la órbita de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

ARTÍCULO 44 sexies.- Las agrupaciones políticas sólo podrán contratar la provisión de espacios de publicidad en vía pública para campañas electorales con los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña.

ARTÍCULO 44 septies.- Actualización del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña. La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL mantendrá actualizada la información del Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral, para conocimiento de las agrupaciones políticas y de la ciudadanía.”.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 61.- Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por las agrupaciones políticas al Cuerpo de Auditores de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, el cual realizará la auditoría en el plazo máximo de NOVENTA (90) días de recibido los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá traslado a la agrupación política correspondiente para que un plazo de DIEZ (10) días de recibido el mismo responda las observaciones o requerimientos formulados, bajo apercibimiento de resolver en el estado de la causa, previa vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

En caso de alianzas, asimismo, se dará traslado a los partidos políticos que la integren. Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de QUINCE (15) días de recibido los mismos. De este informe se dará traslado por CINCO (5) días a la agrupación política. Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, el juez electoral resolverá, previa vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Las presentaciones que realice la agrupación política en el marco de las causas de control patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el tesorero y

responsables económico-financieros del partido político y en el caso de la alianza por los responsables económico-financieros.”.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 62.- Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de UNO (1) a CUATRO (4) años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por UNA (1) a DOS (2) elecciones, los partidos políticos cuando:

- a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32 de esta Ley, o que se trate de fondos no bancarizados;
- b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 39 de esta Ley;
- c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 44 bis de esta Ley;
- d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta Ley;
- e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43 de esta Ley;
- f) No restituyeran, dentro de los NOVENTA (90) días de realizado el acto electoral, el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña;
- g) Los informes de los artículos 23 y 58 de esta Ley no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los fondos recibidos, para desenvolvimiento institucional y para campaña respectivamente.”.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 66.-Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona humana o jurídica que efectuar donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente Ley.

Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15, 16 y 44 bis de la presente Ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o

representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente Ley.

Asimismo, la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el decuplo de dicho monto los proveedores en general que violen lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley.

Las personas humanas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.”.

ARTÍCULO 13.- Incorpórase como artículo 66 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 66 bis.- Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta TREINTA (30) días los estados contables anuales.

Desde los TREINTA Y UNO (31) y hasta los NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega de los estados contables anuales, la multa se triplicará.

Transcurridos NOVENTA (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de QUINCE (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.”.

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 67.- Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que presenten en forma extemporánea y con una mora de hasta TREINTA (30) días el informe final de campaña.

Desde los TREINTA Y UNO (31) y hasta los NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo establecido para la entrega del informe, la multa se triplicará.

Transcurridos NOVENTA (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de QUINCE (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos.

Serán sancionadas con una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente a su determinación, las agrupaciones políticas que incumplieren con la presentación del informe previo de campaña.

En el caso de las alianzas, la multa se aplicará a los partidos integrantes de las mismas, en los mismos porcentajes que se establecieron para el acuerdo económico financiero plasmado en el acta de su constitución.”.

ARTÍCULO 15.- Incorpórase como artículo 67 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 67 ter.- Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Proveedores de Publicidad en Vía Pública para Campaña, por un período de UNA (1) a CUATRO (4) campañas electorales, quienes proveyeran bienes o servicios a las agrupaciones políticas incumpliendo las prescripciones del Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.

Será sancionada con multa de igual monto que el gasto efectuado y hasta el décuplo de dicho monto la agrupación política que contratase la provisión de bienes y servicios para la campaña electoral en violación a lo dispuesto en el Capítulo IV ter del Título III de esta Ley.”.

ARTÍCULO 16- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 71.- Para el juzgamiento de las infracciones a la presente Ley cometidas por las agrupaciones políticas y otras personas jurídicas se aplica el procedimiento establecido en la Ley N° 23.298 y sus modificatorias y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En todos los casos actuará como tribunal de alzada la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, cuyas decisiones sólo serán recurribles por vía del recurso extraordinario establecido en el artículo 14 de la Ley N° 48 y sus modificatorias.”.

ARTÍCULO 17.- Incorpórase como artículo 75 bis de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTICULO 75 bis.- Provisión de Información a la Justicia Nacional Electoral. La JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL podrá requerir toda la información que estime necesaria para la realización de los controles patrimoniales ordinario y de campaña a su cargo, especialmente a los fines de investigar hechos o actos de financiamiento de los partidos políticos que involucren recursos de procedencia ilícita, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos previstos en el artículo 13, inciso 3), de la Ley N° 25.246.

EI BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la PROCURADURÍA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y todo otro organismo público que sea solicitado, deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia efectúe la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL de manera pronta y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal.”.

ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 75 ter de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 75 ter.- Adhesión al régimen nacional de financiamiento. La CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES y las provincias que realicen sus elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad previsto en la Ley N° 15.262, podrán adherir al régimen de financiamiento de campañas electorales establecido en la presente Ley, así como al régimen de campañas electorales establecido en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.”

TÍTULO II Capítulo único
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
LEY N° 19.945

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 64 quater. - Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los TREINTA (30) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance

colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.”.

ARTÍCULO 20.- Incorpórase como artículo 140 bis del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 140 bis.- Sanciones a funcionarios. Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años e inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ (10) años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al funcionario público que realice alguna de las siguientes acciones:

a. Coaccione o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.

b. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.”.

ARTÍCULO 21.- Incorpórase como artículo 140 ter del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 140 ter.- Clientelismo. Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación de SEIS (6) meses a DIEZ (10) años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al que ofreciere, prometiére o entregare dinero o cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de determinada manera, en elecciones primarias, generales o internas de los partidos políticos.”.

ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional Ley N° 19.945, t.o. por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Capítulo III Procedimiento electoral sancionador

ARTÍCULO 146.- Los Jueces Federales con competencia electoral conocerán, de las faltas, delitos y demás infracciones e ilícitos electorales, en primera instancia, con apelación ante la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Estos procesos así como los dirigidos a determinar responsabilidades personales por infracciones a las Leyes N° 26.215, N° 26.571 y sus respectivas modificatorias, que no tengan un régimen procesal establecido, estarán regidos por esta Ley, y en lo que no se oponga a ella, por el Código Procesal Penal.

Artículo 146 bis.- El Juez Federal con competencia electoral de cada distrito conocerá de las infracciones que se cometan, o tengan efectos, en su jurisdicción territorial.

Cuando un hecho tenga efectos en más de un distrito electoral, será competente el juez de aquel en el que se cumplió el último acto de ejecución.

Si se ignora en qué distrito se cometió la infracción, será competente el tribunal que prevenga en la causa.

ARTÍCULO 146 ter.- Las contiendas de competencia serán dirimidas por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL de acuerdo con las reglas del Código Procesal Penal.

Los jueces y representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán excusarse, y podrán ser recusados, en las circunstancias previstas por la Ley N° 19.108 y sus modificatorias y el Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 146 quater.- La acción en los procesos regulados por esta Ley es pública y está a cargo del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con competencia electoral, quien impulsará la acción durante todo el proceso.

Para las audiencias sostenidas fuera de la jurisdicción territorial de dicho representante, la acción podrá ser impulsada por un representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con competencia territorial donde la audiencia se realice.

No se admitirán querellantes particulares.

Artículo 146 quinquies.- El representante del Ministerio Público Fiscal tendrá para la investigación preparatoria de los procesos regidos por esta Ley las facultades previstas por el artículo 212 del Código Procesal Penal.

Durante el día en que se realizan elecciones, las atribuciones y facultades vinculadas con el normal desenvolvimiento del comicio, aquí establecidas para el Ministerio Público Fiscal, serán ejercidas por las Juntas Electorales Nacionales.

Artículo 146 sexies.- El representante del Ministerio Público Fiscal podrá por sí mismo disponer el archivo de las actuaciones si es manifiesta la imposibilidad de identificar al autor o partícipes del ilícito o de encontrar suficientes elementos

de convicción, o si considera que el hecho investigado no constituye un ilícito. En estos casos, la investigación podrá ser reabierta si se encontraran nuevos elementos.

ARTÍCULO 146 septies.- El juez se limitará al control de legalidad de lo actuado por el fiscal en la etapa preparatoria y proveerá las medidas de prueba que éste no pueda producir por sí mismo.

El juez no impulsará la investigación ni dictará auto de procesamiento, elevación a juicio ni ningún otro auto que implique pronunciarse de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado.

Todas las peticiones o planteos de las partes que deban ser debatidas se resolverán en audiencias orales y públicas.

ARTÍCULO 146 octies.- Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado, deberán ser solicitadas por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y decididas por el Juez Federal con competencia electoral de la jurisdicción o en su defecto el Juez Federal más próximo.

ARTÍCULO 146 nonies.- Cuando el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL reuniera, a su juicio, los elementos suficientes, formulará por escrito la acusación contra el imputado, que deberá contener:

- a) La individualización del acusado;
- b) La relación precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen;
- c) El ofrecimiento de las pruebas para la instancia de juicio oral y público; y d) La calificación legal de los hechos.

Artículo 146 decies.- El imputado tendrá CINCO (5) días para ofrecer la prueba de descargo que no se hubiere producido hasta entonces.

Artículo 146 undecies.- El juez valorará la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes de acuerdo con el artículo 356 y concordantes del Código Procesal Penal en audiencia de previo y especial pronunciamiento.

Si el imputado hubiera planteado durante el curso del proceso la nulidad de algún acto y ésta no hubiera sido saneada, la cuestión será decidida por el juez en la misma audiencia.

Artículo 146 duodecies.- La audiencia de juicio se llevará a cabo bajo las reglas de los artículos 363 a 395 del Código Procesal Penal.

El Juez Federal con competencia electoral actuará como tribunal de juicio unipersonal.

Si el Juez Federal que conoció en la instrucción se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante por otro Juez Federal de la misma jurisdicción.

Artículo 146 terdecies.- En la audiencia de juicio, el imputado podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada pudiendo aplicar medidas sustitutivas de la prisión, multa o inhabilitación.

Si en la audiencia de juicio el imputado acepta los hechos de la acusación, el juez dictará sentencia sin más trámite, pudiendo rebajar la sanción hasta en dos tercios (2/3) del mínimo legal.

Artículo 146 quaterdecies.- Las resoluciones interlocutorias dictadas durante el curso de las audiencias serán recurribles mediante recurso de reposición.

Sólo son recurribles ante la Cámara Nacional Electoral:

- a) La sentencia definitiva y los autos que pongan fin a la acción o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la suspensión del juicio a prueba. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir en el caso de la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado a la mitad o más de la escala prevista para el ilícito electoral y de la sentencia condenatoria cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida;
- b) El auto de prisión preventiva;
- c) Las medidas de coerción o cautelares sobre la persona del imputado.

Artículo 146 quincecies.- La etapa preparatoria no puede llevar más de SEIS (6) meses contados desde el primer acto de la investigación.

Cumplido dicho plazo, el juez intimará al representante del Ministerio Público Fiscal, quien podrá optar entre:

- a) Formular la acusación con los elementos disponibles;
- b) Archivar las actuaciones; o
- c) Solicitar una única prórroga que será concedida por el juez en caso de existir elementos suficientes que permitan suponer que podrán encontrarse nuevos elementos de prueba.

Si esta prórroga fuera rechazada, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá formular la acusación con los elementos de los que disponga.

Artículo 146 sexdecies.- La acción en los procesos regulados por esta Ley se extingue por:

- a) La muerte del investigado;

- b) Prescripción;
- c) Amnistía; y
- d) El desistimiento del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Artículo 146 septendecies.- Los plazos de la prescripción y las causales de suspensión e interrupción de dicho plazo son los establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina. A estos efectos, se considerará que los incisos b), c) y d) del artículo 67 del Código Penal hacen referencia a la formulación de la acusación prevista en el artículo 146 nonies del presente Código.

Artículo 146 octodecies.- Cuando un mismo hecho configurara un delito electoral y otro delito penal, el proceso tramitará según las reglas del Código Procesal Penal. El Juez Federal con competencia electoral actuará como Juez de Instrucción.

Cuando en un proceso regulado por esta Ley se detectara la posible comisión de un delito penal no electoral, el juez actuante remitirá copias certificadas al fuero competente.”.

TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO LEY N° 19.108

Artículo 23.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de la Ley N° 19.108, y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) Organizar en su sede un Cuerpo de Auditores Contadores conformado por un auditor coordinador y una cantidad de miembros no inferior a un auditor contador por cada distrito electoral, para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables. A estos fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional y con los recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en caso de no cubrirse el mínimo establecido. El fondo estará destinado a financiar los gastos derivados de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales, y toda erogación orientada al control del financiamiento de las agrupaciones políticas. Trimestralmente el tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto (1/4) de dicho monto mínimo y en caso de no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a fin de que sea completada”.

TÍTULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 24.- Las agrupaciones políticas deben adecuar sus Cartas Orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento a las prescripciones dispuestas en la presente Ley dentro de los CIENTO Ochenta (180) días de su entrada en vigencia, siendo a partir del vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que se opongan a la presente.

Artículo 25.- Créanse diecisiete (17) cargos de Auditores, con categoría presupuestaria de Prosecretario Administrativo que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 26.- Las disposiciones que se establecen con la modificación por esta Ley, del Capítulo III del Título VI del Código Electoral Nacional, se aplicarán a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia.

El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa reorganizarán sus dependencias y adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones que por las modificaciones del Código Electoral Nacional en esta Ley, se les asignan.

Artículo 27.- El Poder Ejecutivo Nacional aprobará el texto ordenado de la Ley N° 26.215 y del Código Electoral Nacional dentro del plazo de ciento ochenta (180) días desde la entrada en vigencia de esta Ley.

Artículo 28.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Ángel Rozas.- N. Pedro Brillard Poccard.-

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

En las últimas décadas se ha incrementado la cantidad de fondos destinados a la actividad política y muy especialmente a la competencia electoral. Esta situación puede y de hecho suele comprometer aspectos fundamentales de la vida democrática, tales como la transparencia en el origen y destino de los fondos utilizados por los partidos, la equidad en la competencia, la autonomía de los representantes respecto al poder económico y la posibilidad de que el financiamiento provenga de actividades ilícitas y organizaciones delictivas.

En virtud de ello, se han ido extremando los esfuerzos para regular el financiamiento de la política, incorporándose en los últimos años normas que han producido avances en este terreno, siendo hitos fundamentales la primera Ley de Financiamiento, la Ley N° 25.600, la Ley N° 26.215, y las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.571.

Estas leyes han tenido por objetivo lograr mayor transparencia y morigerar las diferencias generadas por la desigual capacidad financiera en la competencia electoral. Cada una de ellas incorporó disposiciones y herramientas que implicaron importantes avances que no pueden dejar de ser reconocidos. Sin embargo, también es evidente que muchos de los instrumentos escogidos se han mostrado poco eficientes, incompletos, o sencillamente equivocados para el logro de los objetivos propuestos. De modo que, año tras año y elección tras elección, la sociedad argentina observa que el financiamiento de la actividad política continúa siendo un ámbito donde prevalece la opacidad y donde muchas situaciones continúan comprometiendo seriamente la equidad en la competencia. Esta situación atenta contra la integridad de los procesos electorales y, en definitiva, afecta la calidad de nuestra democracia.

Es por esto que, consustanciado con el objetivo de avanzar hacia una reforma integral de la política, es necesario proponer importantes modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y un conjunto de reformas a la regulación de las campañas prevista en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

Los objetivos principales del presente Proyecto de Ley son dos: por un lado, se busca dotar al sistema de los instrumentos y herramientas necesarios para garantizar que el origen y destino de los fondos utilizados por los partidos y sus candidatos sean de conocimiento público. A la vez, se apunta a garantizar condiciones de mayor equidad en la competencia electoral. Su contenido es el resultado del diagnóstico y las propuestas compartidas por los expertos en el tema respecto a los principales déficits del régimen actual, surgidos de la experiencia acumulada y del derecho comparado.

Para ello, en primer lugar, el Proyecto de Ley propone la bancarización de los aportes a los partidos políticos, tanto para el desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Los informes presentados ante la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL revelan que la inmensa mayoría de los aportes privados a los partidos políticos se realizan en efectivo. Como ha señalado la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, en materia de financiamiento “se destaca con particular relevancia la necesidad de que la ciudadanía tome debido conocimiento del origen y destino del dinero de los partidos políticos.” (cf. Fallo CNE 3010/2002). Es evidente que los aportes en efectivo presentan un obstáculo tan importante como injustificable para el logro de este objetivo. En consecuencia, el Proyecto de Ley prohíbe los aportes en efectivo y establece taxativamente los mecanismos habilitados, para garantizar que el dinero de los aportes sea registrado y su origen fácilmente identificable.

Poder controlar la veracidad de los gastos declarados por los partidos en el marco de una campaña electoral requiere también la introducción de herramientas idóneas. En este sentido, resulta crucial que quienes controlan el financiamiento de la política puedan acceder en forma expeditiva e integral a la información que poseen diferentes organismos de control. Para ello, se plantea la obligación de todos los organismos que sean requeridos por la JUSTICIA NACIONAL

ELECTORAL de brindar en forma completa y clara toda la información que sea solicitada por ésta a efectos de determinar el origen y destino de los fondos de los partidos políticos.

Para avanzar en este mismo objetivo, se establece que quienes pretendan proveer servicios de publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico, que administrará y controlará la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. De esta manera se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas y la justificación de gastos no realizados.

Por otra parte, el proyecto propone la eliminación de la prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes de campaña. Precisamente esta prohibición se encuentra entre las medidas introducidas en los últimos años que no han mostrado resultados positivos, en tanto no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad. En cambio, existe un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos y que la principal consecuencia de esta restricción consistió en un aumento de la opacidad en el financiamiento. Frente a la restricción jurídica, tal como lo advierten los estudios sobre este tema, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha hecho sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público (Julia Pomares, Marcelo Leiras, María Page, Soledad Zárate y Josefina Mignone, “Reforma electoral 2016: Propuestas para fortalecer la equidad y la transparencia de las elecciones”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N° 171, Buenos Aires: CIPPEC, Agosto 2016; Pág. 10).

Antes que prohibir la posibilidad de contribuir financieramente con una campaña, resulta fundamental que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los que aportan a las diferentes fuerzas políticas. La transparencia electoral requiere admitir estos aportes, estableciendo controles eficaces y a la vez topes para que una sola persona, o un pequeño conjunto de personas –humanas o jurídicas-, no pueda constituirse en el patrocinador excluyente de una campaña.

Es por eso que el Proyecto de Ley propone permitir también para las campañas electorales los aportes de personas jurídicas, hasta hoy permitidas sólo para el desenvolvimiento institucional, pero manteniendo límites estrictos respecto a los montos que cada persona puede contribuir a una agrupación. Fortalecer la transparencia en este terreno exige contar con una legislación que no pretenda forzar la realidad, sino que, estableciendo parámetros realistas, apunte a que el electorado pueda conocer cómo se financian las campañas e incorporar esa información a su evaluación sobre los partidos y candidatos.

También a partir de la experiencia reciente se propone una reducción del tiempo que los servicios de comunicación audiovisual deben ceder para fines electorales. La distribución de estos espacios entre las agrupaciones políticas a partir de la Ley N° 26.571 tuvo por objeto mejorar la equidad de los procesos electorales y alentar el voto

informado de la ciudadanía. Sin embargo, el porcentaje de tiempo establecido por la Ley, del DIEZ POR CIENTO (10%) del total de programación, se mostró excesivo, resultando muchas veces abrumador al punto de generar confusión y hartazgo en gran parte del electorado. Esto terminó por conspirar contra los objetivos de la medida. En lugar de alentar a que los ciudadanos conozcan las diversas propuestas ofrecidas por las agrupaciones políticas, los espacios de publicidad electoral devinieron, para muchos ciudadanos, en motivo de hastío con el proceso electoral. A partir de ello, este proyecto plantea conservar el principio de equidad en la distribución de espacios, pero reduciendo al CINCO POR CIENTO (5%) del total de programación el tiempo destinado a la publicidad electoral. De este modo, la distribución de espacios gana en razonabilidad, propiciando así el logro más efectivo de sus objetivos iniciales.

El Proyecto de Ley fija además criterios para evitar la discrecionalidad en la distribución de los aportes extraordinarios para cubrir gastos no electorales, y excluye de la posibilidad de acceder a éstos a los partidos que estén cumpliendo sanciones con motivos de la violación de normas vinculadas al régimen de financiamiento. De este modo se fortalece la equidad en la distribución de fondos públicos, mientras que se pone fin a la práctica de compensar la pérdida de aportes como resultado de las sanciones con el acceso a estos aportes extraordinarios.

Con el objeto de propiciar la rigurosidad, profesionalidad y veracidad de los informes presentados por los partidos sobre sus aportes y gastos de campaña, se impone a las agrupaciones políticas que compiten en elecciones que designen en carácter de responsables económico-financieros a una autoridad partidaria y a un Contador Público matriculado, previendo para ambos como sanción la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y específicamente para el Contador Público la inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

La propuesta ofrece, asimismo, una respuesta frente a otro aspecto habitualmente señalado como problemático de nuestro régimen legal en materia de financiamiento, que refiere a la realización de elecciones nacionales y provinciales en forma simultánea, pero con diferentes regímenes de financiamiento, lo cual dificulta el cumplimiento efectivo de la normativa y torna frecuentemente opaco el origen y destino de los fondos que las agrupaciones utilizan para las campañas. Por eso, dentro del marco que permite nuestro régimen federal, se propone incorporar la opción para que cuando las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adhieran al régimen de simultaneidad de elecciones de la Ley N° 15.262, puedan también adherir al régimen de financiamiento previsto por la normativa nacional, así como a la regulación de campañas del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL. Esta adhesión permitiría homogeneizar la normativa vigente y aplicable a lo que en los hechos es una misma campaña electoral, aunque refiera a cargos de diferentes niveles de gobierno. De este modo se clarifica el escenario para todos los actores involucrados, desde los partidos y la justicia hasta la sociedad en general.

El Proyecto de Ley también incorpora una serie de modificaciones en el régimen de campañas electorales regulado en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

La equidad en materia de campañas electorales es indudablemente un elemento crucial para la calidad democrática. Durante muchos años los argentinos nos acostumbramos a que el aparato del Estado se utilizara masiva y explícitamente para favorecer a las candidaturas del partido al que pertenecen las autoridades del gobierno en ejercicio. Esto incluyó muy especialmente el uso de la publicidad oficial como un instrumento de propaganda, que se acentuaba en los períodos electorales, promoviendo a los líderes y candidatos del partido gobernante y denostando a los opositores. Incluyó también la utilización en forma cotidiana de los presupuestos de las oficinas públicas para promover actividades partidarias y candidatos del oficialismo. En consecuencia, es preciso establecer las condiciones legales que impidan la reiteración de estos comportamientos que avasallan la equidad democrática.

Es por ello que el Proyecto de Ley propone duplicar el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que pudieran promover la captación del sufragio, extendiéndolo de QUINCE (15) a TREINTA (30) días.

Por otra parte, se establecen severas sanciones para los funcionarios que utilicen los recursos y facultades a su cargo con fines partidarios. En el mismo sentido, se tipifican los actos de clientelismo, estableciendo sanciones para quienes ofrecieren beneficios económicos a cambio de la adhesión electoral. Si bien la normativa vigente hace posible perseguir y sancionar este tipo de prácticas, como ha dicho la propia CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, ello “no suple la necesidad de contar con normas específicas que contemplen consecuencias de carácter sancionatorio para los autores de conductas como las denunciadas en autos.” (En referencia a conductas de clientelismo). A partir de ello la Cámara recomienda “una tipificación más precisa de esta clase de conductas”. (Fallos CNE 3605/2005).

Entre las modificaciones previstas por este Proyecto de Ley tendientes a asegurar que las sanciones por faltas y delitos electorales puedan hacerse efectivas se encuentra la incorporación de un procedimiento específico para la tramitación de las causas por faltas y delitos electorales. La legislación actual carece de un procedimiento propio para la persecución de los ilícitos electorales, tal como lo requiere la materia. En particular la aplicación supletoria del procedimiento previsto en la Ley N° 23.298 y sus modificatorias en el Código Procesal Penal de la Nación para la sanción de las conductas reprimidas por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215 y sus modificatorias supone una notable deficiencia procesal. La falta de una legislación certera sobre la materia de procedimientos para las sanciones electorales constituye un obstáculo para la aplicación eficaz de las sanciones previstas, a la vez que genera incertidumbre entre los actores involucrados respecto a la legislación

aplicable. Por eso se propone la incorporación en el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL de un procedimiento electoral sancionador, procedimiento que garantiza el respeto por los derechos políticos de los actores involucrados y el debido proceso en toda la causa, mientras a su vez permite dotar de herramientas idóneas y homogéneas a la justicia para sancionar los ilícitos electorales.

Finalmente, el proyecto fortalece al Cuerpo de Auditores de la Justicia Nacional Electoral encargado de auditar los informes de los partidos políticos. El control del financiamiento político es una tarea crecientemente compleja y que requiere de las capacidades y medios adecuados para su efectiva realización. Ello supone la presencia de un Cuerpo de Auditores a la altura de la complejidad y volumen de esta problemática. La integración actual, por tan sólo OCHO (8) miembros, impide que la tarea de controlar el cumplimiento de las normas de financiamiento, tanto en la vida ordinaria como de campaña, pueda cumplirse en tiempo y forma. Por estos motivos el proyecto propone la creación de DIECISIETE (17) nuevos cargos de auditores, estableciendo una integración del cuerpo que incluye un Auditor Coordinador y una cantidad de miembros no inferior a un Auditor Contador para cada distrito electoral.

Se presenta este Proyecto de Ley con la convicción de que el conjunto de reformas propuestas fortalecerá decisivamente la integridad y la transparencia de la actividad política en nuestro país, contribuyendo así a la construcción conjunta de una democracia más sólida y de mayor calidad.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Ángel Rozas.- N. Pedro Brillard Pocard.-

(IV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..

ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 44 ter de la ley 26.215 - de Financiamiento de los Partidos Políticos-, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 44 ter.- Créase el Registro Nacional de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, que estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Aquellas empresas que deseen hacer públicas encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.

Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada por la Cámara ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién efectuó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral para su público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en el Registro, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, pudiendo la Cámara aplicar las sanciones previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 2º.- Modificase el artículo 44 quater de la ley 26.215 -de Financiamiento de los Partidos Políticos-, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 44 quáter.- Cinco (5) días antes de cada elección, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. Asimismo, no podrán publicar ninguna encuesta o sondeo de opinión hasta tres (3) horas de finalizado cada acto electoral.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación, antes mencionados, deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo tal como lo exige el artículo precedente.

El incumplimiento de esta normativa por parte de las empresas de servicios audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, podrá ser sancionado por la Cámara Nacional Electoral con multa que va del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá carácter de título ejecutivo.

ARTÍCULO 3º.- Agrégase el artículo 44 quinquies a la ley 26.215 -de Financiamiento de los Partidos Políticos-, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 44 quinquies.- La Cámara Nacional Electoral podrá aplicar a las Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión que no cumplan con lo establecido en los artículos 44 ter y 44 quater las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Multa de 500.000 a 5.000.000 de pesos;
- d) Suspensión del Registro;
- e) Caducidad de inscripción en el Registro.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Cristina Fiore Viñuales.-

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

Durante el último proceso electoral que atravesó el país se pudo observar con mayor detenimiento cómo funciona el sistema y que cosas hay que corregir. Es en ese contexto que la Cámara Nacional Electoral como órgano del Poder Judicial puso de manifiesto las falencias en algunos artículos de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

En la reforma política encarada en 2009 por la ley 26.571, se incluyó en el régimen a las Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, estableciendo un sistema normativo con requisitos que deben cumplir a fin de realizar las mediciones a ser publicadas.

La principal exigencia es la presentación de un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién efectuó la contratación, el monto facturado por el mismo, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta aplicada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de

campo, todo ello debe ser presentado ante la Cámara Nacional Electoral

El exiguo número de informes técnicos presentados por las empresas de encuestas y sondeos de opinión ante la Cámara Nacional Electoral, que no se condice con la cantidad de mediciones difundidas por distintos medios a la opinión pública, privan a la ciudadanía de información sobre la metodología utilizada en la elaboración de las encuestas ya publicadas.

Ante ello, la Cámara Nacional Electoral emitió una Acordada en donde destaca que, del total de empresas registradas en el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión de la misma Cámara, sólo ocho presentaron las fichas técnicas correspondientes a las encuestas realizadas en las diferentes elecciones del corriente año. En la misma publicación instó a las empresas a que cumplan las normas contempladas en el art. 44 ter de la ley 26.215 y en la Ac. CNE 117/10 que estableció el procedimiento para la inscripción, presentación y publicación de la información requerida en el Registro que se difunde en su sitio web.

Al mismo tiempo, la Cámara solicitó al Congreso de la Nación que “evalúe la posibilidad de revisión del régimen vigente, para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos tendientes a su correcta observancia”

Es en este contexto, que el presente proyecto se enmarca en la línea establecida por la Cámara Nacional Electoral, entendiendo que la única forma de dotar al sistema de mayor previsibilidad es modificando los conceptos básicos.

Para ello, a través de esta propuesta se modifica el Registro que pasa a ser permanente y funcionar bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, además las empresas que no se encuentren inscritas en el Registro no podrán difundir por ningún medio trabajos de sondeo o encuestas de opinión, pudiendo la Cámara aplicar las sanciones que también son incorporadas por el presente proyecto.

Otro aspecto destacable del mismo, refiere al establecimiento de tiempos previos y posteriores a cada acto eleccionario para la publicación de resultados de encuestas, sondeos de opinión o pronósticos electorales, así como también la referencia a sus datos.

Por último, se establecen sanciones para las empresas de medios que publiquen las encuestas de las empresas que no estén habilitadas o que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por el presente.

Estas correcciones son las imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las empresas de encuestas y sondeos de opinión, así como también para el ejercicio de la actividad jurisdiccional de la Cámara Nacional Electoral, que sin la posibilidad de aplicar sanciones, cualquier disposición resulta de difícil o imposible implementación.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.-

Cristina Fiore Viñuales.-

(V)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Modifícase el artículo 63º de la ley 26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 63. - Los candidatos, los precandidatos, el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:

a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral.

b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

c) recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20º y 32º.

b) habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 39;

d) recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos 15º y 16º;

e) realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45º, 47º y 48º.

f) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43º.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María M. Odarda. –

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 9141-D-2014, autoría de la Diputada Carla Carrizo.

Hasta el año 2002, Argentina contaba con un conjunto de normas dispersas en leyes, decretos y resoluciones que fijaban la regulación

del financiamiento de los partidos políticos, abarcando tanto los periodos electorales como los no electorales.

Con el objetivo de aumentar la transparencia y la equidad en la competencia electoral, con la sanción de la Ley 25.600 de Financiamiento de los Partidos Políticos, en 2002, se eliminó el anonimato de las donaciones, se introdujo el uso de Internet como mecanismo de difusión, se reguló el derecho de acceso a la información, se incluyó la obligación del informe previo a la elección con el objetivo de facilitar a los ciudadanos de información relevante para votar, y se previó la suspensión automática de la entrega de fondos públicos a los partidos que no cumplieran con los requisitos de rendición de cuentas.

En 2006 se deroga la ley 25.600 y se sanciona la Ley 26.215 que transformó algunos consensos alcanzados en la sanción anterior. En efecto, como sostiene Delia Ferreira Rubio "la unificación de cuentas de campaña y ordinaria de los partidos, la eliminación de los candidatos como sujetos obligados o alcanzados por la ley, la eliminación de la suspensión automática de entrega de fondos públicos no contribuyen a generar transparencia y desarticulan algunos de los incentivos previstos en la ley anterior para promover la rendición de cuentas".

Si bien el sistema mixto de financiamiento de los partidos políticos, basado en aportes públicos y privados tiene sustento tanto en la Constitución Nacional (artículo 38) como en el debate ocurrido al momento de la sanción de la primera ley de financiamiento partidario, lo que debe repensarse es la reforma de 2006, en tanto que si bien mantiene la línea de transparencia incluyó cambios que significan un empeoramiento de las regulaciones que intentan prevenir acciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales.

La modificación que aquí se promueve incluye en la responsabilidad del manejo de los fondos de campaña a los precandidatos y a los candidatos que compiten en la contienda electoral. De esta manera se busca incluir dentro de los sujetos que deben rendir cuentas y pueden ser sancionados a los candidatos y precandidatos de las agrupaciones políticas y partidos políticos que se presentan en elecciones. Esta regulación sugerida por Brasil, Uruguay y Chile resulta importante como modelo ya que focaliza en los actores que al fin de cuentas representan a la ciudadanía.

Es por este motivo que se incluye en la modificación del artículo 63º de la ley 26.215 la figura de los precandidatos y los candidatos de los partidos políticos en el Título V sobre las Sanciones.

Para garantizar la calidad de la democracia y un vínculo eficaz de representación política, debe trabajarse sobre la transparencia del financiamiento de la política.

Las campañas electorales, si bien no son el único eslabón de dicha conexión entre electores y representantes, constituyen el eslabón inicial del pacto de representación. Asimismo, la equidad y

transparencia en el manejo de fondos de campaña fortalece el círculo virtuoso de confianza hacia los representantes.

A través de la transparencia del origen y el destino de los fondos de financiamiento de campañas, queda claro quién se encuentra detrás de los candidatos. Con estas modificaciones pretendemos evitar sostener regulaciones que opacan los vínculos entre donantes y candidatos, a la vez que se intenta responsabilizar a estos últimos del manejo de los fondos de campaña. El objetivo es fortalecer las premisas de la representación democrática, posibilitando un vínculo informado entre ciudadanos y sus representantes.

La calidad de las instituciones, la garantía de los derechos de los ciudadanos y la orientación de las políticas públicas promovidas por los gobiernos se hallan en relación directa con el origen de los fondos que financian la actividad política. Para evitar que las decisiones de las autoridades respondan a intereses espurios y prevenir la corrupción es necesario contar con una buena regulación y un sistema de control eficiente.

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores que acompañen el presente proyecto de Ley.

María M. Odarda. -